

Universidad de Medellín

Criminalidad, grupos armados y reinserción: perfiles y motivaciones*

Melina Ocampo**

Recibido: 31 de febrero de 2014

Aprobado: 30 de abril de 2014

RESUMEN

Con el fin de determinar las causas por las cuales una persona ingresa a un grupo armado ilegal en Antioquia, se revisó la literatura existente tanto en el ámbito internacional como en el nacional. La misma se contrastó con la información cuantitativa existente de los victimarios y exvictimarios en los órdenes nacional y departamental, y la información cualitativa encontrada en entrevistas a miembros de bandas criminales y en grupos focales con expertos.

Un sujeto puede tener motivaciones para delinquir basadas en la coerción, los deseos individuales, los incentivos selectivos, los entornos sociales y familiares, los agravios, la falta de control social, y en unas características o rasgos personales que lo pueden hacer más propenso a realizar actividades delictivas. Su continuidad en un grupo armado dependerá de las estrategias de enganche que pueden consistir en la incriminación, las prebendas económicas, el discurso ideológico, o en amenazas. Luego de un proceso de desmovilización, otros factores como la inseguridad personal, la falta de influencia política, la ausencia de prestigio social, la

inseguridad económica y otras fallas específicas del proceso de reintegración a la sociedad pueden influir en la reincidencia en actividades criminales.

En Antioquia, la coerción como estrategia de reclutamiento continúa siendo utilizada; las motivaciones fundamentadas en los entornos sociales se observaron como esenciales y comunes para bandas criminales y guerrilla; los deseos individuales enfocados en el interés por una vida militar estuvieron más relacionados con la guerrilla, y los sentimientos codiciosos se asociaron más con las bandas criminales; los incentivos selectivos a través de las promesas de salario fueron propios de las bandas criminales; y por último, los agravios, que son soporte ideológico propio de la guerrilla, son también usados por las bandas criminales como estrategia de reclutamiento y de búsqueda de legitimidad en los territorios en los que buscan consolidarse.

Palabras clave: grupos armados, victimarios, motivaciones, reclutamiento, desmovilización, reintegración, perfiles, guerrilla, bandas criminales.

* Este artículo es el producto de una investigación realizada en el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC-D–, adscrito a la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia. Se agradece la colaboración de Enzo Nussio por su asesoría metodológica y sus valiosas investigaciones sobre el proceso de desmovilización en Colombia, y a la Agencia Nacional para la Reinserción –ACR–, Policía de Antioquia –DEANT–, y Séptima División del Ejército, por brindarnos la información necesaria para la realización de esta investigación.

** Líder de análisis cualitativo del SISC-D, magíster en Estudios de Migraciones de University of Sussex, especialista en Seguridad Social y abogada de la Universidad de Medellín. Correo electrónico: melina.sisc@gmail.com

Criminality, Armed Groups, and Reinsertion: Profiles and Motivations

ABSTRACT

With the purpose of determining the causes by which a person becomes a member of an illegal armed group in Antioquia, existing national and international literature was reviewed. This literature was compared to the quantitative information related to perpetrators and former perpetrators in the country and in the State, and the qualitative information found in interviews made to members of criminal bands and focal groups with experts.

An individual can have good reasons to commit crimes based on coercion, individual wishes, selective incentives, social and family environments, damages, lack of social control, and on several personal characteristics or traits which may make of him more prone to commit criminal activities. His continuation in an armed group will depend on the recruitment strategies that can involve incrimination, economic benefits, ideological speech or threats. After a demobilization process, other factors such as personal insecurity, lack of political influence, absence of social prestige,

economic insecurity, and other specific failures of the process of reintegration to society may result in the person's new perpetration of criminal activities.

In Antioquia, coercion as a recruitment strategy is still a frequently used method; basic motivations in social environments were observed as essential and common for criminal bands and guerrilla groups; individual intention focused on the interest for a military life were more related to guerrilla and avaricious feelings were much more associated to criminal bands; selective incentives after promising a salary were factors related to criminal bands; finally, damages, that are an ideological support of guerrilla groups are also used by criminal bands as a strategy for recruitment and a search for legitimacy within the territories where consolidation is sought.

Key words: armed groups; perpetrators; motivations; recruitment; demobilization; reintegration; profiles; guerrilla; criminal bands.

Preámbulo

Los motivos de ingreso a un grupo armado son variados y múltiples; sin embargo, cuando se realiza el análisis de por qué dos personas que han sido afectadas de igual manera por los factores que contribuyen al crimen¹ toman o no la decisión de ingresar a aquel, es cuando se puede identificar la causa por la cual la persona comenzó a delinquir o reincidió en actividades ilegales.

De acuerdo con la literatura existente en la materia, se identificaron seis causas para ingresar a un grupo armado que no son excluyentes entre sí, y unos factores personales que hacen al sujeto más propenso a delinquir. Adicionalmente, se clasificaron cinco posibles motivaciones para la reincidencia en actividades criminales de la población desmovilizada individual y colectivamente.

Estas causas están fundamentadas en estudios académicos y, a su vez, complementadas con lo manifestado por analistas de guerrilla y bandas criminales de Antioquia en grupos focales, entrevistas a expertos e información recogida en encuentros con victimarios o exvictimarios, así como testimonios, historias de vida y narrativas, recopilados de fuentes primarias y secundarias.

Las motivaciones encontradas para el ingreso al grupo armado o para reincidir en actividades delictivas son basadas en: 1) coerción, 2) en los deseos individuales, 3) en las redes sociales, 4) en los incentivos selectivos, 5) en los agravios, y 6) en la falta de control social. Adicional a esto, se encontraron unas características o rasgos personales que hacen que el sujeto sea más propenso a delinquir. Las causas que fueron halladas por los estudios académicos de Desmovilización, Desarme y Reinserción –DDR- para que los desmovilizados reincidan en actividades delictivas son: la inseguridad personal, la falta de influencia política, la ausencia de prestigio social, la inseguridad económica y las fallas específicas del proceso de reintegración.

A. Causas

La coerción

Ingresé porque tuve un percance con el “Elmer Cárdenas”, que le dijo a mi familia que debía desocupar la finca, porque dijeron que éramos auxiliares de la guerrilla; y como una opción fue la de ingresar para evitar que me mataran a mí y a mi familia, lo hice (Jiménez López, 2012).

¹ Según Thoumi (2010) son muy diversos y son: la propensión genética, el género, el origen étnico y social, la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, la corrupción del sistema político y económico en el que el individuo opera, las crisis económicas, las migraciones, los hogares destruidos, el “madresolterismo”, el debilitamiento religioso, la violencia social, los desplazamientos forzados, el oportunismo, la falta de autocontrol y la educación deficiente.

Las teorías que están basadas en la coerción pretenden resolver el planteamiento presentado por los teóricos Blattman y Miguel (2010), Gates (2002), y Humphreys y Weinstein (2008) de la acción colectiva que plantea que desde las causas racionales del comportamiento humano (Olson, 1995), es muy peligroso actuar en la empresa insurgente, con el objetivo de lograr el bien común. Como para esta corriente la vinculación se realiza con la coerción que los grupos armados ilegales –GAI– ejercen por medio de la estrategia del reclutamiento forzado, los sujetos deben actuar en oposición a su lógica racional.

Esta maniobra de guerra ha sido empleada por insurgentes y contrainsurgentes (Kalyvas, 2006). En Colombia, el 2 % de los paramilitares y el 7 % de los guerrilleros desmovilizados encuestados² por los investigadores Nussio y Ugarriza (2013) manifestaron haber sido reclutados forzosamente.

La anterior cifra puede tener un margen de error proveniente del hecho de que la misma fue extraída teniendo como fuente la población de desmovilizados y no la de la población activa de miembros de grupos armados ilegales, y es previsible que los desmovilizados reclutados forzosamente tiendan a desertar con mayor frecuencia que quienes ingresaron voluntariamente. Además como un hallazgo de la citada investigación, se determinó que quienes fueron vinculados siendo menores de edad no se identificaron como reclutados forzosamente, un ejemplo de lo cual se puede observar en el siguiente testimonio:

Quando ingresé vivía en el Totumo municipio de Necoclí. El Comandante era Carlos Correa. Mi papá me decía que no quería verme en esto... cuando iba a cumplir los 17 años, apareció un señor que le decían Camaleón, que era conocido como autodefensas, él me hizo la propuesta y yo acepté... (Jiménez López, 2012).

Según Alejandro Eder (2014), director de la Agencia Colombiana para la Reintegración –ACR–, el 10 % de las personas que se han desmovilizado fueron desvinculados como menores de edad. La investigadora Theidon (2007) demobilization and reintegration (DDR) determinó que el 65 % de los excombatientes ingresaron al grupo cuando eran menores de edad³ y la edad promedio de reclutamiento de menores de edad de los desmovilizados fue de 12 años (Eder, 2014). En un estudio del 2005 realizado por el ICBF, que toma como base los menores atendidos (520) entre agosto y septiembre, se encontró que el 70 % de los niños reclutados eran hombres y el 30 % mujeres (Jiménez López, 2012). Información que fue confirmada también para Antioquia por el Ejército.

Nina Winkler (2012) explica que por medio de la amenaza y ofreciéndoles un trato familiar a los niños, niñas y adolescentes –NNA–, estos terminan

² Estudio basado en el análisis de la información de 1.485 antiguos paramilitares y guerrilleros (muestra representativa de 30.000 excombatientes que participaban en el programa de reintegración a 2008).

³ Entrevistas realizadas a 112 excombatientes, de los cuales 64 eran miembros de la guerrilla (ELN o FARC) y 48 de las AUC. Del total, 14 eran mujeres (todas habían militado en la guerrilla).

vinculados al conflicto armado. Es decir, que cuando son arrancados de sus núcleos familiares, los GAI aprovechan el hecho de que pierden sus entornos de protección y buscan remplazarlos en otros escenarios. Es así como en el grupo armado les crean rutinas, les imponen obligaciones, llegando a ser respetados con el tiempo. En últimas, el adolescente llega incluso a cambiar a su familia y su rol protector, por el del grupo armado.

En Antioquia, el 22.51 % de los desmovilizados⁴ fueron reclutados siendo menores de edad, vinculación que según la Ley colombiana se considera forzada. La cifra del departamento de Antioquia es muy inferior a la encontrada por la investigadora Theidon (65 %). Lo anterior puede ser consecuencia de que en su muestra la guerrilla tiene mayor representación que los paramilitares.

El 34 % fueron reclutados entre las edades de 18 y 25 años; el 19 % entre los 26 y 40 años; el 2 % entre 41 y 60 años, y solo 2 personas fueron reclutadas siendo mayores de 60 años. De 1490 desmovilizados no se tiene información sobre el momento de su reclutamiento. Es decir que, el óptimo período de reclutamiento es entre los 12 y los 25 años, rango en el que fue reclutado el 57 % de los excombatientes.

El Bloque Noroccidental de las FARC (que hace presencia en Antioquia, Chocó y Córdoba), particularmente el Frente 36, ha reducido en los últimos años, la estrategia del reclutamiento forzado, debido a que ha resultado riesgoso para la organización tener a personas trabajando por vías coactivas, porque tienden a desertar con mayor frecuencia. Sin embargo, en algunos municipios de la zona de Vertiente de Chorros Blancos de la subregión Norte del departamento, están utilizando niños y niñas para transportar artefactos explosivos, en algunos casos, incluso, les pagan por realizar *el mandado*. También están *encuadrillando*⁵ a las redes de apoyo al terrorismo –RAT–, razón por la cual actualmente hay presión sobre la población, especialmente en San Andrés de Cuerquia (Ejército, 2014).

Según los analistas de BACRIM, el caso de las bandas criminales es similar al de los paramilitares, pues una mínima porción de sus integrantes ingresa al grupo en contra de su voluntad. Por lo general, su entrada es concertada, en especial porque buscan reclutar personas experimentadas. Durante los años siguientes a la desmovilización colectiva de las AUC, se pudo observar que aproximadamente siete de cada diez integrantes eran exparamilitares; actualmente la proporción es cuatro de diez. A los menores de edad los utilizan para transportar estupefacientes y armas, así como de informantes. La edad promedio de ingreso al grupo es de 19 a 20 años.

⁴ Información suministrada por la ACR sobre los desmovilizados residentes en Antioquia que se encuentran en estado activo, inactivo, suspendido, culminado y con terminación de componentes, con corte a noviembre de 2013.

⁵ Entiéndase como incorporando a las filas armadas.

Los deseos individuales

En el 2007 los Rastrojos me desplazaron de Valdivia y yo me uní a los Urabeños con el fin de poder apoderarnos del pueblo y poder retornar a donde mi familia (entrevista 1, 2014).

La guerrilla asesinó a mi mamá, yo me quedé solo, me tocó salirme de la escuela y como me quería vengar ingresé al Bloque Metro de las Autodefensas (entrevista 2, 2013).

Yo quería estar bien vestido, pero como era menor de edad no me daban trabajo o cuando conseguía me pagaban menos de lo que se debía como cuando jornaleé en una zona rural de Remedios, entonces me encontré con un amigo que vi muy bien vestido, pero yo lo recordaba igual de pobre que yo, le pregunté qué estaba haciendo y me contó que estaba con los paramilitares (Bloque Metro). Yo le dije que quería ser como él para poder darme mis propias cosas (entrevista 3, 2013).

Estudios etnográficos han encontrado que también hay razones individuales que podrían ser las motivadoras para el ingreso a un grupo armado, como la posibilidad de aventura y excitación por una vida armada, la oportunidad de cobrar venganza en contra de agresores, conseguir una reputación y estatus importante, y adquirir el estilo de vida que resulta de cargar el arma (Kalyvas, 2006; Tezcur, 2009; Villegas de Posada, 2009). Algunos hombres son particularmente vulnerables debido a que por lo general tienen poco acceso a símbolos civiles de prestigio (Theidon, 2007) demobilization and reintegration (DDR como la educación, la reputación profesional, el acceso a ingresos económicos legales y el acceso a la vivienda digna.

Por otra parte, las teorías de la desviación (Duncan, 2010) indican que cuando los jóvenes de un sector de la sociedad perciben que las oportunidades que tienen para alcanzar un estatus social son ampliamente desventajosas, pueden optar por crear su propio sistema normativo, desconociendo las leyes de Estado y generando una cultura de la ilegalidad.

Por medio de un grupo armado, los jóvenes alcanzan el respeto y estatus que anhelan. Especialmente en el caso de los paramilitares, Theidon (2007) demobilization and reintegration (DDR observó que tenían un concepto de masculinidad militarizada y su pertenencia al grupo armado les permitió sentirse hombres, salir con mujeres más bonitas y, en general, percibirse mejor.

Cuando los individuos ingresaron al grupo porque sentían placer y atracción por la vida violenta, ostentaban poder al cargar un arma y fortalecieron su reputación; es posible que esta atracción pueda perdurar después de la desmovilización (Kaplan and Nussio, 2013; Nussio and Ugarriza, 2013; Tezcur, 2009; Theidon, 2007; Villegas de Posada, 2009; Wood, 2003) En este sentido, los analistas del Ejército manifestaron que los desmovilizados buscan tener cualquier tipo de vinculación

con la vida militar y esta exploración los lleva, por ejemplo, a tratar ingresar a las Fuerzas Militares incluso en calidad de informantes, comprar indumentaria militar o dormir en sus viviendas en hamaca. Según lo observado por ellos, es un estilo de vida que difícilmente dejan.

Nussio y Ugarriza (2013) indican que los exparamilitares (79 %) estuvieron más interesados en ingresar al grupo armado antes de hacerlo, en comparación con la guerrilla (58 %), porque el paramilitarismo era un negocio (Ejército, 2014) y propagó la cultura ilegal. Sin embargo, para los excombatientes de estos grupos el deseo por la vida militar era generalizado. Para ellos tener este estilo de vida era más importante que cualquier afinidad ideológica por alguno de los dos bandos. Es decir, que en un principio, los integrantes de estos grupos antagónicos son las mismas personas, pero nacieron en distintos lugares, con actores ilegales hegemónicos y estrategias de reclutamiento diferentes, todo depende de la región de nacimiento (Ejército, 2014).

En Antioquia, el 18 % de la población ha pertenecido al Ejército o a la Policía, cifra que incluso llega al 22 % cuando disminuye la densidad poblacional del lugar en donde se tomó la muestra⁶. Se confirma, entonces, que la población en las zonas rurales del Departamento tiende a tener mayor interés en llevar una vida militar, que los pobladores de las zonas con 100 mil o más habitantes, debido a que los símbolos de prestigio cultural masculinos están más asociados a la guerra, que a los patrones culturales de reputación civil, tal y como lo asegura Theidon.

Mi sueño era ser un militar, pero fracasé porque tenía varicocele y en el Ejército me declararon no apto, entonces entré al Bloque Metro de las Autodefensas, y al cargar el arma me sentía más seguro, desestresado y además podía apoyar económicamente en mi casa (entrevista 4, 2013).

Antes de ingresar estaba en cuarto de primaria, siempre tuve el sueño de ser soldado, me presenté al Ejército pero no me recibieron porque tenía 17 años, de allá me vine y me presenté en Dabeiba, y yo no sabía quiénes eran los paramilitares, mis amigos siempre me molestan y me *recochan* porque yo me le presenté a unos policías, yo les dije que quiénes eran los *paracos*, que yo iba para la escolita, ellos me requisaron, me pidieron los papeles y como era menor de edad, dijeron que no sabían, luego cuando yo me fui, me llamaron y me dijeron que fuera a donde el señor de camisa amarilla, me dijeron vaya pregúntele a él... (Jiménez López, 2012).

Con respecto a los factores que influyen en la reincidencia, hay un 53 % de posibilidades de que una persona con fuertes inclinaciones personales para

⁶ Según la Encuesta de Percepción de la Seguridad y la Convivencia en el Departamento de Antioquia contratada por la Gobernación de Antioquia y realizada por Invamer y Eafit, con una muestra de 2408 encuestas distribuidas en todo el departamento, lo que permitió obtener un margen de error inferior al 2 % por columna total y un 95 % de confianza. Fue realizada durante el mes de noviembre de 2013.

reincidir en la participación en GAI, lo haga⁷ (Kaplan and Nussio, 2013). Bayer et al. (2007) y Blattman and Annan (2010) argumentan que los excombatientes que ingresaron al grupo y se desmovilizaron siendo menores de edad, pueden tener motivaciones más fuertes de venganza y mayores conductas violentas.

La codicia también puede hacer a la persona vulnerable a la reincidencia (Collier and Hoeffler, 2004, 1998; Keen, 2000). Este factor en el contexto de Antioquia puede tener mayor influencia en el sujeto debido al narcotráfico, al narcomenudeo y a las extorsiones, en particular, a la minería.

Sin embargo, en el modelo aplicado por Nussio y Kaplan, la codicia no estuvo asociada con una mayor reincidencia, aunque según la muestra de la población, algunos reincidentes fueron asociados a delitos como el tráfico de estupefacientes o la extorsión (las entrevistas confirmaron también la hipótesis de los autores).

Según la ACR, en Antioquia 1627 desmovilizados han reincidido en actividades delictivas (ver mapa 1), es decir, el 25 % (6592 personas) de la población activa residente en el Departamento. Los municipios en donde han ocurrido con mayor frecuencia estas reincidencias son Medellín (884 eventos), Bello (76), Tarazá (70), Caucasia (61), Necoclí (59), Turbo (54), Puerto Berrío (44), Apartadó (35), Cáceres (35) y Carepa (30). Según la información de capturados de la Policía, durante 2012 y 2013 el delito por el que más hubo capturas en el Departamento fue el tráfico de estupefacientes (37 %), conducta punible que cuando fue cometida por desmovilizados estuvo asociada en un 94 % con exparamilitares y solo en un 6 % con exguerrilleros.

El nordeste de Antioquia es un ejemplo de un fracaso parcial del proceso de reintegración de los excombatientes del Bloque Central Bolívar de rango medio, que reincidieron en actividades delictivas al entrar a componer las filas de la Bacrim Rastrojos, para continuar percibiendo las rentas ilegales o legales, especialmente de las extorsiones y la minería.

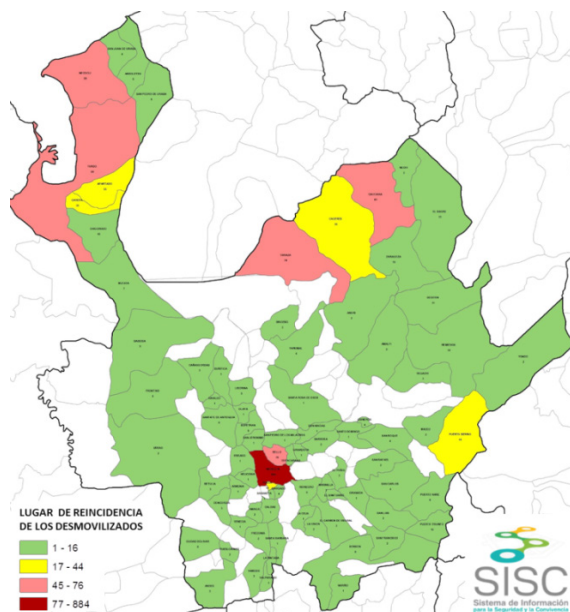
A partir de la información de capturados⁸ se pueden observar conductas codiciosas de personas privadas de la libertad en Antioquia durante el 2013. El 39 % fueron identificados por la Policía como narco o microtraficantes; el 28 % fueron catalogados como delincuentes comunes; el 3 %, como integrantes de bandas criminales⁹; el 1.3 % como consumidores de estupefacientes; el 0.4 %

⁷ Este estudio utilizó un modelo *Logit* (time-invariant) para predecir la probabilidad de que un excombatiente cometa un crimen. También fueron usados los modelos *Cox* que reportan el índice de amenazas exponenciales en vez de sus coeficientes, en donde un índice mayor que uno indica un incremento en el riesgo de reincidencia. Los resultados muestran que la reincidencia puede ocurrir a través de múltiples crímenes y que hay múltiples móviles y caminos para reincidir en el crimen.

⁸ Sobre esta población se presume su inocencia hasta tanto no hayan sido vencidos en juicio (artículo 29 C. N.).

⁹ Llama la atención la baja filiación de los capturados en las bandas criminales. Posiblemente esto se explique porque el 86 % de las capturas se realizaron en el Valle de Aburrá, Oriente y Suroeste, regiones en donde la Policía no reconoce la existencia de bandas criminales.

como integrantes de la guerrilla; y el 0.06 % como desmovilizados (21 AUC, 2 FARC, 1 ELN); del 28.2 % no se tiene información sobre su perfil delictivo.o.



Mapa 1. Lugar de reincidencia (condenados) de los desmovilizados residentes en Antioquia.

Fuente: Datos suministrados por la Agencia Colombiana para la Reintegración –ACR y procesados por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Antioquia – SISC-D.

Según lo encontrado en el grupo focal con analistas de Bacrim, en el caso de las bandas criminales el principal motivo de ingreso es la codicia: el salario que van a percibir en el grupo armado. Otros deseos individuales se observaron en menor medida, tales como la venganza y el interés por la vida militar.

Las redes sociales

Soy huérfana de papá desde los 6 años... por problemas de dinero, me fui con mi mamá, quien nunca se interesó por mí, nunca nos comprendimos. Estaban mal económicamente, con escasez de alimentos, no tenían con que comer... una tía le propuso que yo me fuera para las autodefensas, y me fui a los 15 años en Pavarandó... (Jiménez López, 2012).

Cuando llegué a San Marcos (Sucre) comencé a relacionarme con unas personas que eran de la BACRIM Rastrojos, como no encontraba empleo, cuando me llamaron para que ingresara al grupo, me fui, y me mandaron plata para costearme el viaje hasta Machuca (Segovia) (entrevista 5, 2013).

Las redes familiares y sociales son una condición necesaria para la participación en grupos armados, porque sin contactos en los grupos no hay posibilidades

de ingreso. Las redes son comúnmente familiares (Hart, 1999; Kalyvas, 2006; Roldán, 2002) y un ingreso no planeado y gradual al grupo es tan común como la decisión consciente de hacerlo (Horton, 1998). Al respecto, Duncan (2013) plantea que por esta razón la distinción entre víctima y victimario es “*medio azarosa*”, los victimarios vienen de los mismos lugares de donde provienen las víctimas y hay que mirar si las condiciones son propicias para que sean reclutados.

En este sentido, la guerrilla, en comparación con los paramilitares, tiende a tener un mayor arraigo en las comunidades; sus integrantes generalmente ingresaron por lazos con familiares o amigos cercanos que pertenecían al grupo. En la guerrilla las facciones reclutan en poblaciones específicas, trayendo como consecuencia composiciones de “grupo espejo” a las comunidades en las cuales están incrustadas. Esta relación tan cercana abre más las posibilidades para que más mujeres y niños y niñas ingresen al grupo. Sin embargo, la variable familiar no tuvo resultados significativos en el modelo aplicado por Ugarriza y Nussio (2013).

En Antioquia hay territorios en donde la guerrilla tiene un fuerte arraigo y es de estos lugares de donde aproximadamente el 40 o 50 % de los miembros de las FARC provienen (Ejército, 2014). Las personas que ingresan a las FARC deben estar referenciadas por alguien de confianza de la organización que incluso responde por esta, como una especie de fiador.

Por otra parte, y particularmente en el ELN y el Frente18 de las FARC las mujeres tienen una participación fundamental porque son consideradas de mayor confianza y realizan las labores que requieren de mayor confidencialidad como la protección a cabecillas. Por esta razón, como se verá más adelante, solo en la guerrilla las mujeres alcanzan a tener, en promedio, un tercio de representación en las filas.

Las bandas criminales también tienen territorios de fuerte arraigo, pero en oposición a la guerrilla, en las Bacrim, la participación de mujeres es mínima y tienen funciones como el reclutamiento de personas y el manejo y pago de las nóminas.

Según Theidon (2007) el 36 % de los guerrilleros desmovilizados ingresaron al grupo porque vivían en una zona controlada por este grupo y entrar a las filas era casi natural; el 17 % de los exparamilitares lo hicieron por el mismo motivo. El 21 % de los desmovilizados de la guerrilla ingresaron al grupo porque un conocido los convenció, mientras el 29 % de los exparamilitares lo hicieron por el mismo motivo.

Estas personas, que por lo general son jóvenes, crecieron en contextos caracterizados por la falta de oportunidades. El 84 % de los desmovilizados de los paramilitares dijeron que este grupo se encontraba activo en la zona durante el

año anterior de su ingreso al mismo; en el 39 % de los casos los exguerrilleros encuestados manifestaron que la guerrilla estaba activa en el área de su residencia (Nussio and Ugarriza, 2013).

Kalyvas (2006) argumenta que en las zonas de dominio de algún grupo, los habitantes no tienen ninguna otra opción sino colaborar con el actor hegemónico y van ingresando gradualmente. Si el individuo reside en ambientes con presencia similar de dos actores, otros factores serán decisivos (Nussio and Ugarriza, 2013).

En general, en la literatura, las redes sociales persistentes son un motivo por el cual los excombatientes pueden reincidir. En Sierra Leona y El Congo se encontró que cuando los desmovilizados de rango medio entablaban nuevamente relaciones con otros integrantes del grupo eran más propensos a rearmarse (Themnér, 2011). Según Kaplan and Nussio (2013), los desmovilizados que se relacionan con sus pares pueden experimentar nostalgia, presiones y oportunidades para rearmarse, o tendrán mayores oportunidades para emplear sus habilidades criminales (Agnew and White, 1992).

Las personas que entraron a componer las filas de las Bacrim en Antioquia fueron en su mayoría desmovilizados exparamilitares (Policía, 2014; Ejército, 2014) y en general personas con experiencia en armas como reservistas y que habían prestado servicio militar. En el caso de la Bacrim Rastrojos, sus cabecillas fueron en su mayoría exparamilitares que en el Bloque Central Bolívar de las AUC tenían un rango medio. Todos son amigos o conocidos (Policía, 2014).

Las Bacrim ubican a las personas de acuerdo con sus habilidades: si tienen destrezas agrícolas los localizan en un *punto agrícola* para que ayuden al campesino; si tienen conocimiento sobre el manejo de armas (exmilitares, expolicías y desmovilizados) los ubican como patrulleros; si su experiencia es el sicariato los utilizan como tales, y si no tienen experiencia, los sitúan en zonas urbanas como informantes (Policía, 2014).

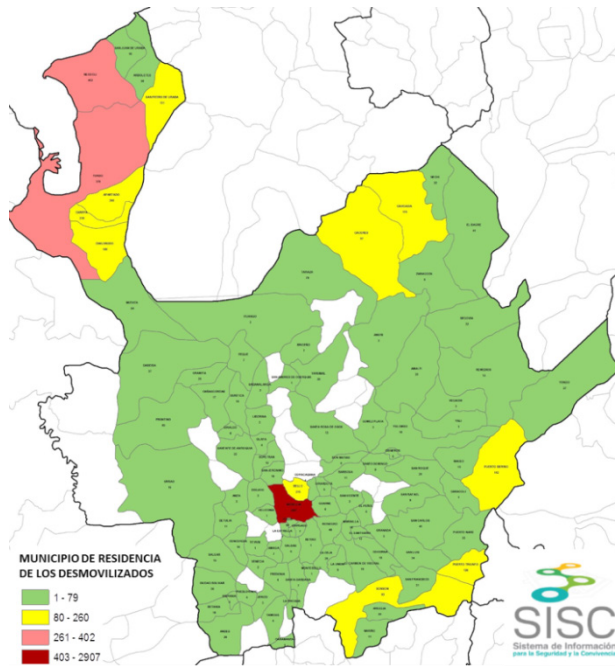
Kaplan and Nussio, en un nuevo estudio (2013), encontraron que en Colombia el asocio entre excombatientes no ha representado un incremento significativo de la reincidencia, pero la residencia en un territorio con presencia de una banda criminal los hace un 167 % más propensos a reincidir. En Antioquia hay presencia o influencia de bandas criminales en 62 municipios (ver mapa 3), principalmente de la BACRIM Gaitanistas (o Clan Úsuga como actualmente se le denomina).

El citado estudio también sometió a evaluación la hipótesis de si hay más oportunidades para reincidir en lugares de producción de coca, pero estadísticamente no arrojó resultados significativos. Tampoco fueron significativos los resultados de la variable que analizaba la reincidencia de los desmovilizados que retornaron a su lugar de residencia antes de la desmovilización, comparándolos

con los nuevos residentes (Kaplan and Nussio, 2013). Actualmente¹⁰ residen en Antioquia 6592 participantes en el proceso de DDR; de estos, el 27.15 % vive en el mismo lugar en el cual fueron reclutados.

Como se puede observar en el siguiente mapa (2), el 44 % de los desmovilizados residentes en Antioquia tiene su domicilio en el municipio de Medellín y cerca de la mitad de todos ellos en el Área Metropolitana. El 6.1 % reside en Necoclí y 5.7 % en Turbo, para un total del 25.2 % en toda la subregión de Urabá. En el Bajo Cauca reside el 6.3 %, y el 5.1 %, en el Magdalena Medio. El resto reside en menor medida en las otras regiones del Departamento.

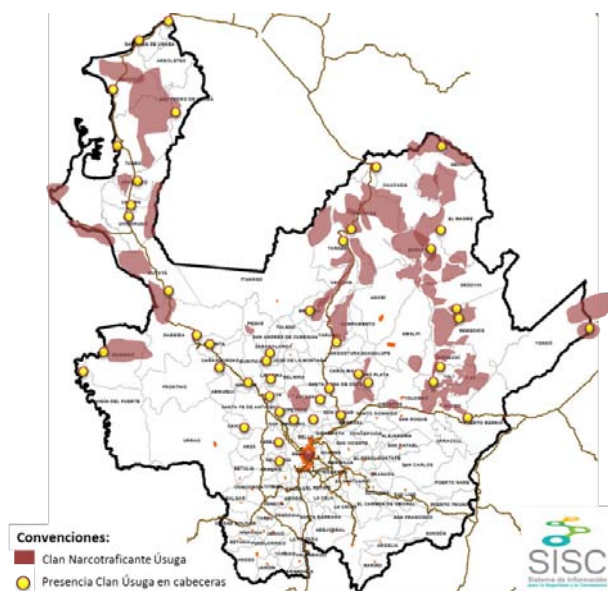
Cuando se compara el mapa de presencia o influencia de bandas criminales en Antioquia (mapa 3) con el de lugar de residencia, se evidencia que la mayoría se encuentran en riesgo de reincidir por habitar en la zona de influencia de una banda criminal. Para el caso de Antioquia, Policía y Ejército consideraron que este hallazgo de Nussio y Kaplan, sí ha sido una notable situación de riesgo para los desmovilizados y un causante de reincidencia.



Mapa 2. Lugar de residencia de los desmovilizados en Antioquia

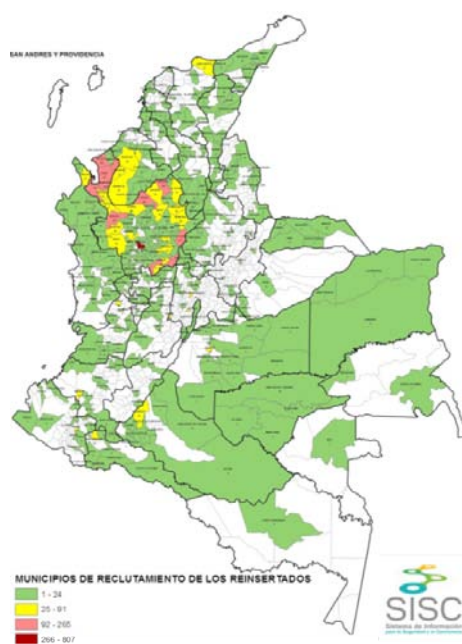
Fuente: Datos suministrados por la ACR y procesados por el SISC-D.

¹⁰ Corte: 30 de noviembre 2013.



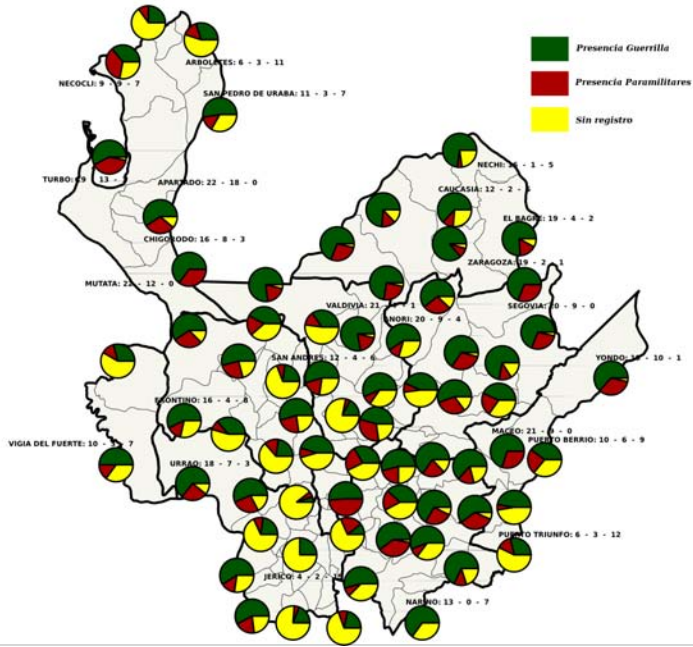
Mapa 3. Presencia o influencia a nivel veredal de bandas criminales en el departamento de Antioquia.

Fuente: Policía Nacional y SISC-D.



Mapa 4. Municipio de reclutamiento de los desmovilizados que residen en Antioquia

Fuente: Datos suministrados por la ACR y procesados por el SISC-D.



Mapa 5. Índice de presencia violenta en Antioquia (consolidado 1988-2010)

Fuente: Datos suministrados por el CERAC y procesados por el Observatorio Departamental de Víctimas del Conflicto Armado y Derechos Humanos del departamento de Antioquia.

Para el período comprendido entre 1988 y 2010, se relaciona presencia violenta en la gran mayoría de los municipios de Antioquia (mapa 5). En las jurisdicciones en donde fueron reclutados los desmovilizados se observa un alto índice de presencia violenta que coincide con los lugares de reclutamiento: en el Urabá principalmente de guerrilla, pero también de paramilitares en Mutatá, Turbo, Chigorodó y Necoclí; en el Bajo Cauca principalmente de guerrilla; en Norte alto de guerrilla; en Nordeste de guerrilla y paramilitares; en la zona de páramo del Oriente de paramilitares; y en Medellín (lugar en donde se intensificó el reclutamiento) de paramilitares y guerrilla por igual, como también en Itagüí y Envigado.

Los incentivos selectivos

Ellos nos decían que teníamos que hacer esto o tal cosa, como guardar las armas, y así nos daban más dinero, y yo me compraba mis cosas, mis papás me reclamaban y yo les decía que no dijeran nada, al punto que me dijeron que me fuera de la casa, y así hice (C. 4, Medellín) (Historia de vida 1, 2008).

Ingresé a los 16 años... antes de ingresar a las Autodefensas era bombero voluntario y además estudiaba en la nocturna. Ingresé porque me encontré con un amigo y él me insistió porque me iban a dar mucha plata... (Jiménez López, 2012)

Ingresé al Elmer cárdenas a los 16 años en el 2004; fue voluntariamente, por cuestiones económicas. Estuve un año, ganaba 275 000 y nos pagaban cada dos meses, salía de permiso, le colaboraba a la familia, compré ropa, compré alhajas... (Jiménez López, 2012).

Los incentivos selectivos buscan también contra-argumentar la teoría de la acción colectiva, así que los incentivos o factores atrayentes serían la forma de hacerlo. Según Humphreys y Weinstein (2008), estos consisten principalmente en incentivos económicos como el dinero, la oportunidad de saqueo y el acceso a tierras, tal y como es mencionado también por los autores de las teorías provenientes de la codicia (Collier and Hoeffler, 2004, 1998; Grossman, 2002; Keen, 2000) supported by a narrative of grievance. But since grievance assuagement through rebellion is a public good that a government will not supply, economists predict such rebellions would be rare. Empirically, many rebellions appear to be linked to the capture of resources (such as diamonds in Angola, and Sierra Leone, drugs in Colombia, and timber in Cambodia.

Los incentivos selectivos, a su vez, pueden fungir como factores atrayentes hacia los grupos armados, cuando, por ejemplo, en un contexto de guerra civil es más seguro estar en un grupo armado que por fuera de él (Grossman, 2002; Kalyvas and Kocher, 2007; Keen, 2000) this paper shows that, if the technology of predation is sufficiently effective, then having a "king", who can enforce a collective choice to allocate resources to secure producers' claims to their product, is better for everyone, including both producers and potential predators, than not having a king, even though the king maximizes the consumption of a ruling elite. This result obtains because a more effective technology of predation both makes the social value of deterring predation larger and constrains the proprietary state more tightly." "DOI": "10.1016/S0176-2680(01.

La historia que tuvo mi barrio fue de mucha violencia; se formaban muchas balaceras, cuando yo era un niño nunca pensé que me fuera a afectar, fui creciendo y por el temor a que me pasara algo a mí o mi familia, yo formé parte de ella, porque me relacioné con un combo (Historia de vida 2, 2008).

En el caso de Antioquia, alrededor del 12 % de la población respondió¹¹ que se siente insegura o muy insegura y este hecho podría constituirse como un factor atrayente hacia los grupos armados; sin embargo, la intensidad del conflicto armado colombiano ha disminuido ostensiblemente (Pizarro Leongómez, 2004), por tanto, no se podría asemejar a un contexto de guerra civil, tal y como lo plantean los autores citados.

Estos incentivos operan por igual para insurgentes y contrainsurgentes. Sin embargo, en Colombia, los incentivos económicos fueron más usados por los paramilitares, en comparación con la guerrilla. Es así como solo el 9 % de

¹¹ Según la Encuesta de Percepción de la Seguridad y la Convivencia en el Departamento de Antioquia.

los guerrilleros desmovilizados entró al grupo armado por motivaciones económicas, mientras el 27 % de los exparamilitares lo hizo por el mismo motivo (Theidon, 2007).

A su vez, los motivos relacionados con la codicia, o incentivos materiales, estuvieron más presentes en la reincidencia de los paramilitares que en la guerrilla (Nussio and Ugarriza, 2013), debido a que los paramilitares han estado más naturalizados y motivados con las ofertas monetarias que los guerrilleros. En la guerrilla ninguno de sus miembros recibe salario; en algunos casos pueden solicitar una ayuda económica, pero estas no son obligatorias e incluso les han sido negadas en varios casos a cabecillas. Para esta organización colegiada es primero el interés del grupo que el particular (Ejército, 2014).

En el caso de las Bacrim “*el trasfondo casi siempre es el sueldo*” (Policía, 2014); es percibir el salario que les ofrecen a sus integrantes. Si la persona no tiene experiencia con las armas, le ofrecen hasta 1 millón de pesos por informar y le garantizan que no tiene que cargar un arma, pero la banda trata rápidamente de *engancharlos* incentivándolos a asesinar a una persona por una fuerte suma de dinero. Luego de que la persona ha cometido este crimen u otro delito, el grupo armado se certifica a sí mismo que esta persona no desvelará información a las autoridades o no se retirará de la agrupación porque ya se encuentra *incriminada*. Esta estrategia fue aprendida del paramilitarismo.

Los agravios

Quando yo tenía 30 años de edad, en Puerto Libertador, estaba adelantando un trabajo político con el PCC con integrantes del EPL, ELN Y FARC, cuando se adelantó un operativo militar y pedí el ingreso al F. 18 de las FARC. Los motivos que yo tuve para ingresar fue cambiar las condiciones socioeconómicas de desigualdad y pobreza de la población (entrevista 8, 2013).

Estas motivaciones se basan en la teoría de la literatura temprana sobre la revolución social y los movimientos de guerrilla que sostiene que hay miembros de clases urbanas, campesinos sin tierras y minorías étnicas que se sienten en desventaja económica, social y política, y que por esto desarrollan una frustración tan alta que los lleva a acudir a las vías de hecho para lograr un cambio. Es decir, que la posición social y económica determinará la participación en los grupos armados (Davies, 1962; Gurr, 1970; J. M. Paige, 1975; Scott, 1976; Wickham-Crowley, 1992).

Igualmente, es por la configuración de condiciones socioeconómicas predominantes en un territorio, que los grupos armados de guerrilla logran dominar y explotar determinadas regiones (Nussio and Ugarriza, 2013).

En la guerrilla la disciplina y la dirección de tropa son asuntos fundamentales; a nivel de comisión las FARC realizan reuniones ideológicas una vez por

semana. Unos años atrás las FARC eran muy estrictas en el adoctrinamiento marxista-leninista, lo cual se ha ido perdiendo porque sus intereses económicos se han incrementado y han ido predominando; se conocen casos de desmovilizados que no se saben el himno de las FARC o que no tienen grandes fortalezas en conocimientos de su ideología.

Sin embargo, su estrategia de reclutamiento está enfocada en difundir su discurso romántico y bohemio, en comunidades que han sido abandonadas por el Estado, o en donde solo llega el Ejército de manera transitoria. En los lugares de arraigo y en donde suplen las necesidades de la comunidad haciendo las veces de Estado, crean las condiciones propicias para el reclutamiento de personas, ya sea directamente para sus filas o como red de apoyo (Ejército, 2014).

Con respecto a los paramilitares, Duncan (2006 y 2013) manifiesta que estos eran narcotraficantes y que la ideología para ellos no era importante, porque al final lo que les interesaba era controlar un territorio para traficar. En este camino se encontraron con élites locales que no eran narcotraficantes, pero que les tocó “*montarse en ese bus*” de la guerra, en muchos casos sin posibilidad de elección, porque esta demandaba que la gente tuviera funciones de autoridad en ámbitos locales.

En el narcotráfico lo que vale no es la producción de la mercancía, sino que esta pueda llegar a su mercado final. El valor agregado en este negocio es el poder que permite proteger todo el proceso, y ese poder se consigue solamente controlando el territorio; por tal razón el tráfico de drogas se volvió una actividad subsidiaria de la del control de territorio, que es una función propia de ejércitos y burocracia (Duncan, 2006, 2013).

Aunque lo anterior es cierto, los paramilitares, como actualmente las Bacrim, con el fin de reclutar personas y tener legitimidad en las comunidades en las cuales están insertos, tienen unos estatutos y un régimen disciplinario. Los Gaitanistas aún conservan como herencia de las autodefensas dicha práctica; la Policía sostiene que manejan un discurso “*seudopolítico*” con el cual disfrazan sus acciones, con ideas tales como proteger y defender el pueblo. Para esto, en cada estructura hay un cabecilla político que reúne a la comunidad, realiza *sancochadas*, ofrece mejoramiento de vivienda, capacita a las juntas de acción comunal y se hace llamar *punto campesino*. Su principal interés es insertarse en puntos estratégicos para reclutar personas y movilizar hombres, armas y estupefacientes (Policía, 2014).

La Policía prevé que si se captura por ejemplo a cabecillas como “Otoniel”, “Gavilán” o “Nicolás”, quienes son los que mantienen la cohesión dentro del grupo y buscan sostener el proyecto político heredado del paramilitarismo, la Bacrim Gaitanistas tomaría otro rumbo y “*podría haber guerra otra vez*” (Policía,

2014) porque se desintegraría en grupos locales que eventualmente podrían disputarse el poder, como sucedió después de la desmovilización.

Los estatutos de la BACRIM Gaitanistas estipulan que están dispuestos a negociar si son llamados por el Gobierno con este fin, claro que el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Farid Samid Benavides Vanegas, ha negado tajantemente la posibilidad de negociación, en distintos medios de comunicación de prensa y radio.

Con respecto a la reincidencia, investigaciones basadas en estudios cualitativos (Mashike, 2007) mencionan los agravios políticos como una de las razones por las cuales los insurgentes sudafricanos volverían a delinquir. A su vez existen otros riesgos, como se verá más adelante, con la población de desmovilizados, basados en la falta de influencia política en su proceso de reintegración a la sociedad.

La falta de control social

Las motivaciones fundadas en la falta de control social indican que la proclividad de la persona para delinquir será mayor cuando haya menores restricciones para detener su accionar criminal. Es decir, los individuos serán más propensos a participar en actividades ilegales en donde haya oportunidades para hacerlo (Sherman et al., 1989; Weisburd and Groff, 2012) (Weisburd y Groff, 2012).

Adicionalmente, se genera una reproducción social del crimen (Duncan, 2010) cuando se percibe que la posibilidad de obtención de estatus social por medio de oportunidades legales es muy baja y que es mayor por medios ilícitos.

Se pueden encontrar restricciones para delinquir o reincidir provenientes del nivel educativo del individuo, los contextos familiares o la efectividad en la aplicación de la ley (Akers, 2009; Becker, 1968). Con respecto a esta última, hay un hallazgo al nivel nacional que, aunque no fue representativo estadísticamente, aparece como reductor de la reincidencia y fue la variable de presencia de la Policía, reflejada por número de capturas por departamento (Kaplan and Nussio, 2013).

Con el fin de averiguar si en Antioquia un ejercicio parecido al llevado a cabo por Kaplan y Nussio disminuye la reincidencia (el objetivo es demostrar si la presencia del Estado es generadora de control social), se realizó el ejercicio de determinar si la aplicación de la ley a partir de capturas puede disminuir la reincidencia de los reinsertados (se determinó por el número de capturas de desmovilizados, no por presencia de la Fuerza Pública en el territorio como fue desarrollado por los investigadores mencionados).

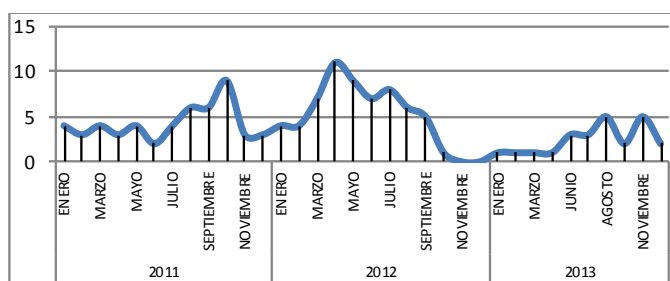


Gráfico 1. Capturas desmovilizadas, discriminadas por mes y año, en Antioquia.

Fuente: Policía Nacional

Se puede observar que los picos de las dos gráficas que se muestran a continuación (gráficos 1 y 2) son inversamente proporcionales en los tres años comparados (2011 al 2013), excepto en el último semestre de 2013, en el cual se evidencia una tendencia similar. Este ejercicio confirma inicialmente lo encontrado por los investigadores: la aplicación efectiva de la ley disminuye la reincidencia y genera control social. Sin embargo, se tendrían que hacer estudios más detallados.

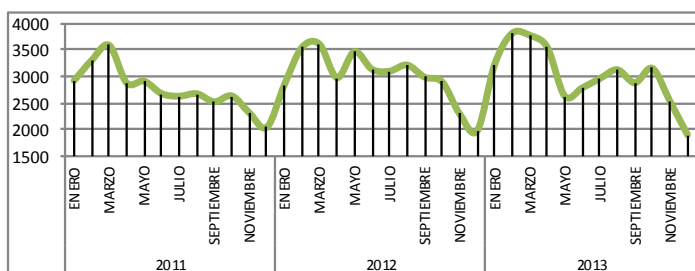


Gráfico 2. Capturas totales en Antioquia, discriminadas por mes y año

Fuente: Policía Nacional

Policía y Ejército se mostraron escépticos frente a este hallazgo y sostuvieron que con respecto a la Bacrim la aplicación de la ley no detiene su reincidencia en actividades criminales. El Ejército frente a la guerrilla tiene la misma postura, pero aclara que sin controles, se incrementa su actuar delictivo.

Los fuertes lazos familiares, la coerción del grupo primario, la presión de pares y las sanciones sociales también pueden fungir como barreras que restringen el actuar delictivo (Moloney et al., 2009). Según Kaplan y Nussio (2013) los excombatientes que reportaron tener ataduras sociales y familiares fueron menos proclives a delinquir, como los que tienen hijos (39 % menos propensos) y los que reportaron ser aceptados por sus familias (51 % menos proclives). Los analistas expertos en victimarios en Antioquia estuvieron totalmente de acuerdo con estos hallazgos, e incluso agregaron que una relación sentimental puede traer a un delincuente a la legalidad.

En el 2005 me entregué y entregué mi fusil y les cuento que ahora soy un hombre nuevo porque tengo mi propia familia y mis propios sueños y espero que las cosas sigan así porque así vive uno feliz. Tengo 2 hijos que me aman y yo los amo con todo mi corazón y estoy dispuesto a salir adelante con ellos (Historia de vida 3, 2008).

En Antioquia tienen pareja estable (compañero permanente o cónyuge) el 36.8 % de los desmovilizados, y en el 5.5 % de las parejas ambos integrantes son participantes del programa de reintegración. El 65.2 % no tiene hijos; del 34.8 % que tiene, el 77.8 % tiene entre 1 y 2 hijos. Es decir, la población de desmovilizados residentes en Antioquia no tiene un alto nivel de ataduras o generadores de control familiar, porque solo el 36 % de los mismos es un 39 % menos proclive a delinquir por tener hijos, según el estudio de Kaplan y Nussio (2013). En las FARC solo a los miembros del Estado Mayor y a ciertas personas clave de la organización se les permite procrear, lo cual es, a su vez, un motivo de deserción de parte de las guerrilleras y que explica el bajo porcentaje de hijos.

Por otra parte, existe un riesgo en los lugares donde ha habido reclutamiento sistemático por parte de los grupos armados, ya que la comunidad tiende a callar y a no denunciar, configurándose un silencio que le es funcional a la guerra, porque la comunidad deja de ser un entorno protector o generador de control social. Generalmente en donde hubo este tipo de reclutamiento existe un mayor riesgo de reincidir en actividades delictivas (Jiménez López, 2012).

Con respecto al tema educativo, Kaplan y Nussio (2013) encontraron que los desmovilizados son 41 % más propensos a reincidir si no complementaron sus estudios de bachillerato durante el programa de reintegración.

Los logros educativos sobresalientes, como haber complementado los estudios de bachillerato mientras permanecieron en el programa de reintegración, estuvieron asociados con una menor reincidencia (36 % menos) (Kaplan and Nussio, 2013). Si se examinan en detalle la muestra y los resultados, se encuentra que la disminución de la reincidencia está más asociada a los exguerrilleros, y menos a los exparamilitares.

Lo anterior posiblemente se deba a que los exguerrilleros tenían un grado menor de escolaridad que los paramilitares e ingresaron en una edad más temprana al grupo. En las FARC el 70 % de los miembros es analfabeto y tan solo el 10 % tiene un nivel superior de educación (Jiménez López, 2012). Vale mencionar en este caso, que en Antioquia estudiantes universitarios, por iniciativa propia, tienen un programa de alfabetización en las zonas de operación de los distintos frentes de la guerrilla (Ejército, 2014).

Con respecto al nivel educativo actual (ver Tabla 1), el 33.75 % de los participantes del programa de reintegración terminó el bachillerato; el 18.1 % culminó los grados cuarto o quinto de primaria; el 13.82 % finalizó los grados sexto o

séptimo; y por último, el 9.8 % no tiene ningún tipo de educación. Esto significa que los desmovilizados que no han terminado su bachillerato (66 %) son un 41 % más propensos a reincidir en actividades delictivas, de acuerdo con los hallazgos de Kaplan y Nussio (2013) expuestos con anterioridad.

Con respecto al total de 36 267 personas capturadas por la Policía durante el año 2013 en Antioquia¹², la mayoría (38 %) son bachilleres, seguidos por quienes terminaron Básica Primaria con el 23.3 %. El 2.8 % de los capturados son iletrados y el 1.5 % cuenta con al menos un semestre de estudio en el nivel de enseñanza superior.

<i>Nivel educativo</i>	<i>N.º personas</i>
Sin nivel educativo	645
Alfabetización	198
Grados 1, 2 y 3	506
Grados 4 y 5	1192
Grados 6 y 7	911
Grados 8 y 9	543
Grado 10	372
Grado 11	2225

Tabla 1. Desmovilizados residentes en Antioquia por nivel educativo

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–.

Con respecto al nivel educativo actual, el 33.75 % de los participantes del programa de reintegración terminó el bachillerato; el 18.1 % culminó los grados cuarto o quinto de primaria; el 13.82 % finalizó los grados sexto o séptimo; y por último, el 9.8 % no tiene ningún tipo de educación. Esto significa que los desmovilizados que no han terminado su bachillerato (66 %) son un 41 % más propensos a reincidir en actividades delictivas, de acuerdo con los hallazgos de Kaplan y Nussio (2013) expuestos con anterioridad.

Con respecto al total de 36 267 personas capturadas por la Policía durante el año 2013 en Antioquia¹³, la mayoría (38 %) son bachilleres, seguidos por quienes terminaron Básica Primaria con el 23.3 %. El 2.8 % de los capturados

¹² Con el fin de comparar se relaciona también a continuación el rango educativo de las víctimas de homicidio en el departamento de Antioquia durante los años 2013 y 2014, que es un poco más alto que el de los victimarios. El 46 % es bachiller; el 36.3 % tiene estudios de primaria, el 3.7 % es analfabeta; y el 1.7 % tiene por lo menos un semestre de estudios en el nivel de enseñanza superior (porcentaje similar al de los capturados pero muy inferior al de la población de Antioquia en general). Fuente: Región 6 de Policía.

¹³ Con el fin de comparar se relaciona también a continuación el rango educativo de las víctimas de homicidio en el departamento de Antioquia durante los años 2013 y 2014, que es un poco más alto que el de los victimarios. El 46 % es bachiller; el 36.3 % tiene estudios de primaria, el 3.7 % es analfabeta; y el 1.7 % tiene por lo menos un semestre de estudios en el nivel de enseñanza superior (porcentaje similar al de los capturados pero muy inferior al de la población de Antioquia en general). Fuente: Región 6 de Policía.

son iletrados y el 1.5 % cuenta con al menos un semestre de estudio en el nivel de enseñanza superior.

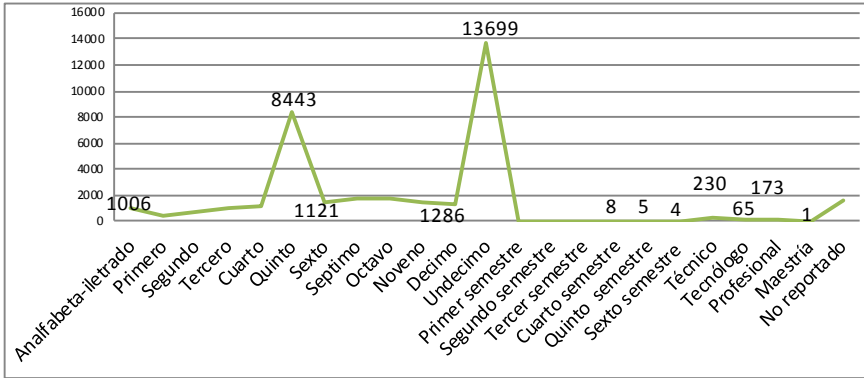


Gráfico 3. Capturados 2013, discriminado por nivel educativo

Fuente: Datos suministrados por la Policía Nacional y procesados por el SISC-D.

Los analistas de Bacrim, manifestaron que la anterior información también se les aplica a los miembros de bandas y que el nivel de analfabetismo es mínimo porque todos deben saber leer y escribir, para poder manejar los IOC (códigos de comunicación).

Nivel educativo	N.º personas
Sin nivel educativo	978
Alfabetización	0
Grados 1, 2 y 3	2361
Grados 4 y 5	3548
Grados 6 y 7	2652
Grados 8 y 9	2315
Grado 10	816
Grado 11	3129

Tabla 2. Población carcelaria región Noroeste por nivel educativo¹⁴

Con respecto a la población carcelaria de la región noroeste (ver Tabla 2), se encontró que el 22.5 % de la población estudió hasta los grados 4 y 5; el 19.8 % son bachilleres; el 16.8 %, hasta los grados 6 y 7; y el 6.2 % no tiene ningún nivel educativo.

Los internos y los desmovilizados son las personas que tienen los índices más bajos de escolaridad. Entre el 18 y el 19 % culminaron sus estudios de bachille-

¹⁴ La región Noroeste comprende todo el departamento de Antioquia, más los centros carcelarios de Quibdó (717 personas) e Itsmina (138 personas). Información con corte al 31 de enero de 2014.

rato y entre el 6 y el 10 % no tienen nivel educativo. En cambio, los capturados que han terminado su Educación Secundaria llegan al 38 %, y solo el 2.8 % no tiene ningún estudio.

En Antioquia el 39 % de la población en general¹⁵ terminó la Secundaria; el 28 % culminó la Primaria; el 13 % realizó estudios técnicos; el 11 %, estudios universitarios; el 1 %, estudios de posgrado, y el 3 % no tiene ningún tipo de estudio. Si se comparan estas cifras, se puede observar que el nivel académico promedio de un antioqueño es mayor al de los desmovilizados y los internos, y es similar al de los capturados.

Adicionalmente, se observa que los victimarios en general han tenido un muy bajo acceso a estudios técnicos y profesionales, cifra que alcanza máximo un 1.5 % en el caso de los capturados, y para los antioqueños es del 25 %. Esta última es la brecha que diferencia a las dos poblaciones y que muestra el punto de quiebre de la educación como generador de control social: el primero, al terminar la Secundaria, y el segundo, la desescolarización temprana en la Primaria.

La tasa de analfabetismo de los antioqueños y los capturados también coincidió (alrededor del 3 %), pero la de los internos y los desmovilizados es dos o tres veces más alta. Avanzar en la reducción del analfabetismo, también debe considerarse como un mecanismo de restricción de la opción criminal.

Continuando con la población de internos, el 30.6 % (4694 personas) participa en el programa de estudio y enseñanza del Inpec, estando casi todos (97 %) en el de estudio (ver Gráfico 4). Antioquia representa el 10.7 % de total de la población de Colombia en este programa. Gráfico 4. Población carcelaria de Antioquia en el programa de estudio y enseñanza

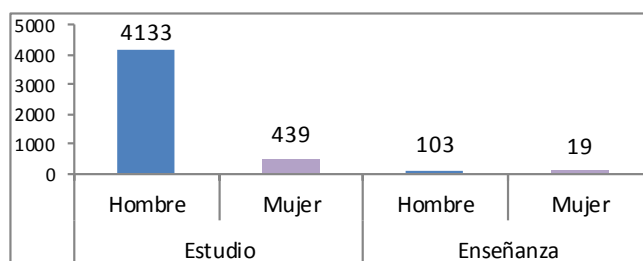


Gráfico 4. Población carcelaria de Antioquia en el programa de estudio y enseñanza

Fuente: Datos suministrados por el INPEC y procesados por el SISC-D.

En el programa de estudio las mujeres representan el 9.6 %; y el 15.6 % en el de enseñanza. Si se tiene en cuenta que ellas constituyen el 9 % de la

¹⁵ Según la Encuesta de Percepción de la Seguridad y la Convivencia en el Departamento de Antioquia.

población total, se puede entender que su participación es mayor a la de los hombres.

El 43.7 % de la población carcelaria de Bellavista está en el programa de estudio y enseñanza; el 12.8 %, de la población de Puerto Triunfo; el 12.3 %, de Pedregal (hombres y mujeres); el 7.3 %, de Itagüí (La Paz); y el 4.2 %, de Apartadó.

Si se pudiera asemejar el programa de reinserción a la sociedad de la ACR con el de resocialización del Inpec, es posible deducir que la población de internos (29.7 % del total) que se encuentra en el programa de estudio también esté disminuyendo el riesgo de reincidir.

En conclusión, si las situaciones familiares de los victimarios y excombatientes mejoran, su nivel educativo incrementa y hay una eficiente aplicación de la ley, la participación en actividades ilegales disminuirá por medio de un proceso de transformación con inclusión, dignidad y decencia.

Características o rasgos personales que hacen que el sujeto sea más propenso a delinquir

Los excombatientes de los paramilitares son un 50 % más propensos a reincidir en actividades delictivas que los excombatientes de la guerrilla (FARC y el ELN) (Kaplan and Nussio, 2013).

Los comportamientos antisociales (ver anexo) pueden volverse más profundos si se ha permanecido más tiempo en un grupo armado. Los desmovilizados son 4 % más propensos de reincidir, por cada año de pertenencia al grupo armado (Kaplan and Nussio, 2013) y en promedio los excombatientes duran 14 años en las filas (Eder, 2014).

En Sudáfrica las habilidades militares fueron una razón para que los insurgentes volvieran a delinquir (Mashike, 2007). Agnew and White (1992) sostienen lo mismo, manifestando que los excombatientes con habilidades específicas para el crimen serán más proclives a delinquir en donde haya mayores oportunidades para emplear sus destrezas y socializar con otros delincuentes.

Duncan (2013) sostiene que estas habilidades o actitudes criminales (disposición e información) también podrían ser una causante para que una persona comience a delinquir, para lo cual tiene dos opciones: ingresar a un grupo armado en donde puede tener una carrera criminal y adquirir prestigio y poder, o delinquir de manera individual, lo cual es muy peligroso, sobre todo en territorios controlados por un grupo criminal, porque puede ser objeto de limpieza social.

Por su parte, el género y la edad constituyen un riesgo para la entrada a grupos armados y son predictores significativos de la reincidencia; de hecho,

las mujeres adultas fueron un 64 % menos propensas a reincidir (Kaplan and Nussio, 2013).

En la muestra de desmovilizados examinada por Kaplan y Nussio, las mujeres tuvieron un 9 % de participación en los grupos paramilitares, en cambio en la guerrilla representaron el 25 %. Según estos mismos autores, en promedio los paramilitares ingresaron al grupo con una edad promedio de 23 años (rango: 7 a 54), y en la guerrilla la edad de ingreso promedio fue de 18 años (rango: 5 a 54), edades que según Ejército y Policía son similares para el caso de Antioquia.

Del total de los desmovilizados en Colombia, el 11 % son mujeres y el 89 % son hombres (Eder, 2014). En Antioquia¹⁶ se han desmovilizado individual y colectivamente un total de 11 551 personas, de las cuales el 8 % son mujeres (porcentaje menor al nacional) y el 92 % son hombres. Estas son las estructuras a las que pertenecían:

Tabla 3. Desmovilizados totales en Antioquia por grupo armado al que pertenecían y sexo

<i>Ex grupo</i>	<i>Total</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>
AUC	9.740	94.46%	5.53%
FARC	1.362	77.53%	22.46%
ELN	410	73.17%	26.8%
ERG	30	60%	40%
ERP	7	85.71%	14.28%
EPL	1	100%	0
Sin dato	1	100%	0
Total	11.551	91.6%	8.38%

Fuente: ACR

El 5.2 % tiene entre 18 y 25 años; el 75 %, entre 26 y 40 años; el 18.8 %, entre 41 y 60 años, y el 0.5 % es mayor de 60 años. En 29 casos no se tiene información sobre la edad del desmovilizado.

¹⁶ Corte: 31 de octubre 2013.

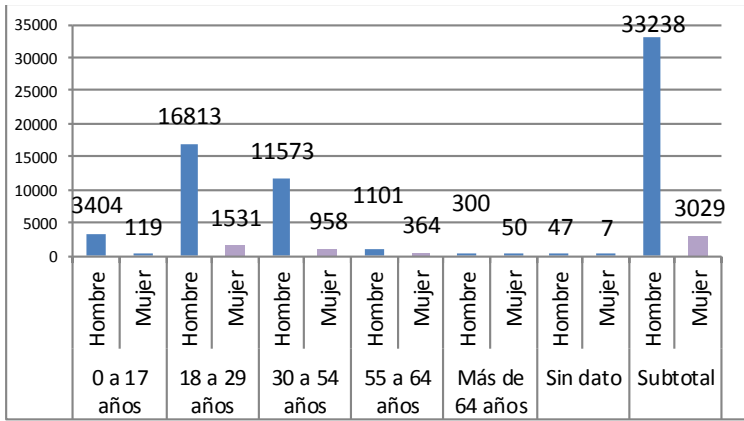


Gráfico 5. Capturas, discriminadas por edad y sexo

Fuente: Datos suministrados por la Policía Nacional y procesados por el SISC-D.

Con respecto a los capturados (ver Gráfico 5), el 91.6 % son hombres y el 8.4 %, mujeres. La mitad (50.6 %) de estos se encuentra en el rango de edad de 18 a 29 años.

Por otra parte, 91 % de la actual población carcelaria son hombres, y 9 %, mujeres, para un total de 15 356 internos en Antioquia. La mayoría (48.9 %) de esta población se encuentra en el rango de edad entre los 30 y los 54 años, seguida por el rango de edad entre los 18 y los 29 años, con el 46.31 % (ver Gráfico 6). Teniendo en cuenta que este último rango comprende solamente 11 años, y que el primero comprende un rango de 24 años, se puede concluir que del total de la población la mayor parte son jóvenes.

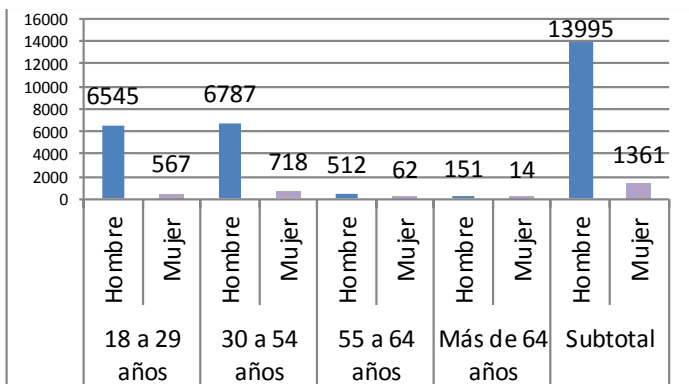


Gráfico 6. Actual población carcelaria discriminada por edad y sexo

Fuente: Datos suministrados por el INPEC y procesados por el SISC-D.

Al nivel nacional los hombres representan el 92.5 % del total, cifra que está un poco por encima de la departamental. Antioquia representa el 12.8 % de la población total de reclusos del país.

El porcentaje de mujeres y hombres desmovilizados, capturados o sindicados/condenados en Antioquia es similar; aproximadamente un 9 % son mujeres, y un 91 %, hombres, excepto por el caso de la participación de las mujeres en la guerrilla, en donde su porcentaje es más alto.

De acuerdo con la información detallada anteriormente sobre el sexo y la edad de los victimarios en Antioquia, se confirma que los hombres jóvenes son quienes más delinquen y por tanto tienen más riesgo de entrar a un grupo armado ilegal. En la guerrilla es el grupo en donde las mujeres alcanzan una mayor participación (20 %-40 %), pero esto se debe al nivel de arraigo que alcanza esta agrupación en ciertas comunidades y a la forma romántica que emplean para reclutar (motivaciones de agravios), mas no a una característica personal que las haga más propensas a delinquir.

B. Posibles causantes de la reincidencia de la población desmovilizada individual y colectivamente

Inseguridad personal

En la etapa de postconflicto puede generarse un aumento en los niveles de inseguridad, debido a que este período es usualmente frágil.

Al respecto, estudios anteriores han identificado problemas con saboteadores violentos del proceso de desmovilización (Moser and McIlwaine, 2001) y problemas con la seguridad personal de los excombatientes (Kaplan and Nussio, 2013; Nussio and Howe, 2012; Nussio, 2012; Hill et al., 2008; Boas y Hatloy 2008).

Los desmovilizados quedan expuestos a invitaciones o amenazas de combatientes para realizar actividades delictivas y reagruparse en empresas criminales (Nussio, 2012). A su vez, se pueden sentir amenazados por pasadas rivalidades o excombatientes que se rearmaron y pueden tener sentimientos de paranoia, debido a sus pasadas experiencias (Nussio, 2011). Como un ejemplo de esto, en África Bøås y Hatløy (2008) relatan cómo encontraron que en Liberia algunos combatientes se habían unido al grupo como una estrategia para proteger a sus familias.

En Colombia, como otro ejemplo, luego de la desmovilización de las AUC y ante el déficit de seguridad o de presencia del Estado en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, surgieron nuevos grupos de bandas emergentes o criminales (Jiménez López, 2012), que han reclutado desmovilizados y que con-

tinúan ejerciendo algunas de las acciones que desempeñaron las autodefensas en sus lugares de origen.

Es por esto que en un eventual contexto de posconflicto, el Estado debe ser un garante confiable de seguridad personal para los desmovilizados (Nussio, 2012) y evitar así el rearme de los mismos con fines de autoprotección.

Falta de influencia política

Los excombatientes, como antiguos participantes de estructuras políticas y militares, tienen albergadas sus motivaciones previas y experiencias beligerantes, las cuales pueden generarles problemas en la reintegración y generar reincidencia (Kaplan and Nussio, 2013).

Nilsson (2005 y 2008) recomienda la implementación de *sustitutos en tiempos de paz*. Con estos se debe convencer a los excombatientes y a sus familias de que los beneficios de la paz superan a los de la guerra. Estos sustitutos se materializan con la garantía de la seguridad económica, la influencia política y la continuidad del prestigio social luego de la desmovilización.

La garantía de influencia política debe ser tenida en cuenta especialmente en el caso de una eventual desmovilización colectiva de los guerrilleros, quienes tuvieron una mayor motivación ideológica e inferiores condiciones socioeconómicas para su ingreso a las estructuras armadas subversivas, en comparación con los paramilitares, quienes en un mínimo porcentaje tuvieron motivos ideológicos para su ingreso a las filas.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que particularmente en el caso de las FARC, sus negociadores solicitaron como punto en la agenda de La Habana la participación política en las contiendas electorales y su protección personal durante dichos procesos, con el fin de ejercer sus derechos democráticos sin riesgos a su seguridad. Esta posibilidad de participación política como cualquier ciudadano fortalece a los excombatientes (Nussio, 2012) y puede mantenerlos atados a la vida civil.

El Bloque Noroccidental que hace presencia en Antioquia tiene una importante representación en La Habana con tres negociadores: dos del Frente 36 (“Olmedo” y “Conejo”) y uno del Frente Mario Vélez (“Tomás Móvil”), al igual que una asistente del Frente Mario Vélez (“Yira”). Esta situación implica que deberá tenerse especial cuidado en la aplicación de los *sustitutos en tiempos de paz* en la garantía de su participación política, en contraposición al riesgo de que la codicia por los ingresos económicos provenientes de la minería y el narcotráfico los lleve a reincidir luego de una eventual desmovilización

Inseguridad económica

De acuerdo con las teorías de la privación relativa, ante los bienes materiales que se desean y la falta de oportunidades financieras para conseguirlos, se pueden desencadenar sentimientos de frustración y rabia que a su vez pueden desatar una conducta ilegal. La posibilidad de participación en actividades ilegales se incrementará si el panorama financiero del individuo empeora (Kaplan and Nussio, 2013).

Es así como un factor importante para la participación en el conflicto armado o su permanencia en él son los incentivos económicos (Nussio, 2012). Luego de la desmovilización, la atracción económica resultante de las actividades criminales con frecuencia persiste y el “poco acceso al capital, la pérdida de las redes sociales, el capital humano insuficiente, incluyendo la educación y las habilidades mercadeables” (Nussio, 2012), con las que se enfrentan los desmovilizados incrementa dicha atracción.

Bøås and Hatløy (2008) y Hill et al. (2008) identificaron que el pobre acceso a tierras y la carencia de ingresos económicos han sido motivaciones para que los combatientes regresen a actividades ilegales. Por otra parte, la falta de empleo (especialmente para quienes habían laborado) y la pobreza fueron una de las razones por la que los excombatientes liberianos manifestaron que volverían a reincidir (Hill et al., 2008).

En Colombia, los investigadores Enzo y Oliver (2013) inicialmente no encontraron que el desempleo aumentara la proclividad a la reincidencia, sin embargo, cuando desagregaron sus hallazgos pudieron evidenciar que solo para los exguerrilleros es cierto esto, pero que para los exparamilitares la variable de desempleo está asociada negativamente.

El resultado se deriva de acuerdo con el tipo de motivaciones que han recibido los combatientes en sus respectivos grupos. Los guerrilleros están más motivados ideológicamente, y los paramilitares lo estuvieron económicamente. Los paramilitares tuvieron tres veces más oportunidades de recibir salario (Kaplan and Nussio, 2013) que los guerrilleros.

Otra situación que puede generar un impacto en esta variable es que los desmovilizados reciben desde el programa de reconciliación una ayuda económica que amortiza las finanzas de los participantes del programa. Esta ayuda asciende a \$320.000 pesos mensuales (Eder, 2014) y se recibe durante el tiempo en que permanecen en el programa.

En oposición a posturas como la de Berdal (1996)', que manifiesta que no se aporta a la reintegración de los desmovilizados en la sociedad cuando se realizan pagos en efectivo, Alejandro Eder, director del programa de reconciliación de la ACR, sostiene que:

El costo de un preso en Colombia es de 14 millones de pesos; por persona, por año; y el porcentaje de reincidencia es del 70 por ciento. En cambio, el costo de reintegración es de 4,9 millones por persona año, y la tasa de éxito es del 80 por ciento.

La mitad de los participantes del programa de reinserción en Antioquia tiene algún tipo de empleo, de los cuales el 33.6 % de los casos es formal. Es decir, que solo el 17 % del total de los desmovilizados tiene un empleo que cumple con el total de las garantías y requisitos de ley.

Otras fallas en el proceso de reintegración a la sociedad

• *En la sociedad*

Una de las grandes críticas que se le realiza al proceso de reintegración en Colombia es que está basado en los desmovilizados como objeto de transición y no en sus contextos locales (Theidon, 2007). Como solución se ha planteado que la justicia transicional y sus medidas son un mecanismo que puede ser utilizado para legitimar los procesos de DDR (desarme, desmovilización y reintegración) y disminuir el rechazo de las víctimas hacia los perpetradores (Nussio, 2012), teniendo en cuenta que las heridas de las víctimas del conflicto son los asuntos críticos (Nilson, 2005) que deben tenerse en cuenta durante el proceso de desmovilización para lograr una verdadera reintegración a la sociedad.

Sin embargo, en ocasiones puede ser contraproducente presionar para la reconciliación de manera inmediata a un período de posguerra debido a las heridas emocionales ocasionadas de manera reciente (Rigby, 2001). Por ende, es mejor procurar solo la coexistencia pacífica en el corto plazo y el acompañamiento a las víctimas (CCDDR, 2009).

Adicionalmente, cuando las comunidades en las cuales se reintegran los desmovilizados ven como injustos los beneficios otorgados a esta población, pueden estigmatizarlos, generándose un rechazo, y por consiguiente dificultar su reintegración (Nussio, 2012). Por ejemplo, la falta de aceptación en las comunidades y familias fue una razón por la que los excombatientes en Liberia volverían a reincidir (Hill et al., 2008).

• *Por la carencia de atención de la salud mental de los excombatientes*

Los excombatientes quedan con traumas psicológicos que pueden llevar al alcoholismo, la drogadicción y a una vida “perturbada”, afectando la construcción de la paz (Nussio, 2012).

• *De acuerdo con el tipo de desmovilización*

Los desmovilizados individuales¹⁷ están más comprometidos con su proceso de

¹⁷ Con el Decreto 1385 de 1994 modificado por el Decreto 128 de 2003, se estableció la posibilidad de la desmovilización individual o abandono voluntario de grupos armados al margen de la ley, de autodefensas y de guerrilla.

reintegración que los desmovilizados colectivos¹⁸, y por tal razón la reincidencia no es un problema mayor para la población de desertores, que dejaron sus armas de manera voluntaria e individual, quienes probablemente hayan tenido que huir de sus grupos (Kaplan and Nussio, 2013; Nussio, 2012; Ribetti, 2009) arriesgando su vida y se sientan mucho más comprometidos con su decisión de retornar a la vida civil. En las FARC la desmovilización es considerada traición y la misma se paga con muerte; es por esto que la posibilidad de que vuelvan a la organización está descartada de plano en la mayoría de los casos (Ejército, 2014)

<i>Tipo</i>	<i>Grupo</i>	<i>N.º personas</i>
Colectiva	AUC	5101
	FARC	4
	ERG	3
Total colectiva		5108
Individual	AUC	207
	FARC	992
	ELN	269
	EPL	1
	ERG	1
	ERP	3
	Sin dato	1
Total individual		1484
Total general		6592

Tabla 4. Desmovilizados residentes en Antioquia por tipo de desmovilización, grupo y número de personas

Fuente: ACR

Debido a lo anterior, si las FARC terminan desmovilizándose colectivamente tal y como lo hicieron los paramilitares, es posible que terminen pareciéndose más a estos últimos (Kaplan and Nussio, 2013) que se desmovilizaron en cumplimiento de una orden, en contraposición de los exguerrilleros desmovilizados individualmente, que lo hicieron por una decisión personal.

De las 34 desmovilizaciones colectivas de autodefensas ocurridas en Colombia, 10 sucedieron en Antioquia, departamento con el mayor número de desmovilizaciones colectivas en el país. El 77.48 % del total de la población se

¹⁸ Al inicio del gobierno de Álvaro Uribe en el año 2002 se realizaron negociaciones de paz, principalmente con los grupos paramilitares, la cuales terminaron con la desmovilización colectiva de estos grupos entre 2003 y 2006. Esta figura estuvo regida por la Ley 782 de 2002 y la Ley 975 de 2005 conocida como la Ley de Justicia y Paz, la cual también sirvió de marco para la desmovilización colectiva del Ejército Revolucionario Guevarista -ERG- y para un pequeño grupo de guerrilleros del Frente 36 de las FARC.

desmovilizó de manera colectiva y solo el 22.51 % lo hizo de manera individual (ver Tabla 4).

Por otra parte, no se pueden volver a cometer los mismos errores que ocurrieron en la desmovilización colectiva de las AUC, cuando se negoció con los altos mandos y no con los mandos medios, quienes en algunos casos no estaban de acuerdo con la dejación de armas y eran los que manejaban la tropa (Fajardo, 2012).

En La Habana hay una buena representación local de negociadores de las FARC y se había dicho que las vulneraciones a las treguas unilaterales podían significar falta de cohesión y representatividad, pero según el Ejército (2014) estas responden a la necesidad de esta guerrilla de mostrarse fuerte y vigente; por tanto, se espera que la mayoría de los hombres en armas acaten la orden de dejación de armas en caso de un acuerdo de paz.

• **Como consecuencia de la debilidad institucional**

En casos en los cuales el Estado es precario y no hay un poder externo que obligue a las partes a cumplir sus acuerdos y compromisos, la desmovilización tiene pocas posibilidades de éxito. Además, es común que el entorno macroeconómico por el que pasa el país en posconflicto esté destruido y no logre asimilar la marea de excombatientes (Nussio, 2012, p. 15).

El proceso de DDR debe entonces estar acompañado con una serie de medidas de estabilización interna, reforma del sector de seguridad, reforma a la justicia, esfuerzos de desarrollo económico y reducción general de armamento (Nussio, 2012).

Por otro lado, individualmente la insatisfacción (Jennings, 2007) con el programa de reintegración es una causa para la reincidencia en el delito.

La debilidad institucional y los riesgos para el proceso de paz también se manifiestan, como sostienen Casas y Guzmán (2010), con la existencia de grupos armados ilegales, la disponibilidad de recursos provenientes del tráfico de drogas, la existencia de mercados ilegales de armas con los cuales los grupos armados se pueden financiar, y la falta de control del territorio por parte del Estado.

Todos los anteriores puntos son sensibles para el caso de Colombia, lo que indica que en un posible escenario de posconflicto, la paz y la disminución de los índices de violencia no serán fáciles de alcanzar, de no darse unos compromisos claros, realizables y verificables entre las partes negociadoras, que incluyan el mayor número de combatientes y de sociedad civil, y que, además, tengan en cuenta las particularidades de los diversos territorios y sus habitantes.

Un punto a favor es que hay lecciones aprendidas y la Agencia Colombiana para la Reintegración tiene una experiencia significativa; en muchos aspectos es pionera en el ámbito mundial en el proceso de DDR, como por ejemplo en llevar un proceso de desmovilización durante el desarrollo del conflicto armado.

Conclusiones

- El perfil de un integrante de Bacrim es el de un joven de sexo masculino, que sabe leer y escribir, tiene estudios de primaria e incluso secundaria, que se vincula en la mayoría de los casos de manera voluntaria al grupo, por medio de la influencia de un conocido o un familiar, o porque nació en una zona con fuerte arraigo de la banda. Sus motivaciones son principalmente codiciosas provenientes de los deseos individuales o incentivos colectivos que usa la agrupación a través del ofrecimiento de un salario. Su perfil es similar al de los exparamilitares.
- El perfil de un miembro de la guerrilla es un joven o una joven, con estudios de primaria o ningún estudio, de un nivel socioeconómico bajo, residente en territorios con poca presencia institucional del Estado, cuyo ingreso al grupo ha sido motivado ideológicamente, ingreso que también pudo haberse dado progresivamente en los lugares donde la guerrilla tiene un fuerte arraigo. Sus deseos individuales se inclinan por tener una vida militar, y en menor medida para que el grupo le satisfaga sus necesidades básicas materiales.
- En general, los victimarios en Antioquia son en su mayoría jóvenes entre los 18 y 29 años. Aproximadamente el 30.5 % son bachilleres, un 21 % terminaron estudios de primaria, y no tienen ningún tipo de estudio entre el 3 % y 9 %.
- Se encontró que la población de desmovilizados es la que tiene el porcentaje más alto (9.8 %) de personas que no han estudiado, seguida por la población carcelaria (6.2 %), y por último, se encuentra la población de capturados (2.8 %).
- Los internos y los desmovilizados tienen menor nivel educativo que los antioqueños en general y un nivel similar al de los capturados. Sin embargo, los habitantes de Antioquia han tenido mayor acceso a la educación técnica o superior, factor este que claramente diferencia a estas poblaciones y permite concluir que es generador de control social porque disminuye el riesgo de vinculación a grupos armados. Similar hallazgo se tuvo con respecto a la población sin ningún tipo de educación. Por eso, avanzar en la alfabetización de los antioqueños ayudará a reducir el riesgo de que se vinculen en actividades delictivas.
- El reclutamiento forzado continúa siendo utilizado en Antioquia debido a la vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados; actualmente

las motivaciones de ingreso de los mayores de edad son principalmente voluntarias.

- Las seis motivaciones de ingreso explican por qué ingresa una persona a los grupos armados, pero su continuidad en estos se puede explicar desde las estrategias que usan los mismos para *enganchar* al sujeto, como lo es la incriminación, los incentivos selectivos por medio de prebendas económicas, los agravios desde su discurso ideológico, o las amenazas en contra de su vida, integridad física o la de algún familiar.
- Las motivaciones de ingreso relacionadas con los agravios continúan vigentes, especialmente en la guerrilla, pero también en las bandas criminales, ya que las posturas ideológicas y su desarrollo le traen legitimidad al actuar del grupo, incentiva la vinculación y permite el actuar delictivo sin mayores presiones sociales.
- En diversos casos, el principal deseo de las personas para ingresar a los GAI era llevar una vida militar; esta aspiración incluso superó las motivaciones de ingreso asociadas a las identidades ideológicas de grupos antagónicos como la guerrilla, los paramilitares y el Ejército colombiano. Los imaginarios culturales atados a la masculinidad militarizada han llevado principalmente a hombres a querer ingresar a un ejército, sin importar la legalidad de su actuar. El rechazo por parte del Ejército Nacional ante la falta del cumplimiento de los requisitos de admisión también ha conllevado el alistamiento de estas personas en grupos armados ilegales.
- Se deben transformar los símbolos de prestigio cultural masculinos asociados a la guerra, en símbolos civiles basados en la educación, las oportunidades, la honestidad, la decencia y la transparencia.
- El nacimiento de las Bacrim como fenómeno posdesmovilización se explica porque la mayoría (9740; 84.3 %) de los desmovilizados en Antioquia son un 50 % más propensos a reincidir en actividades delictivas por el hecho de ser exparamilitares. Además, suelen estar menos comprometidos con su proceso de reintegración al ser en su mayoría (77.5 %) desmovilizados colectivos.
- El 33.75 % de los desmovilizados en Antioquia terminaron sus estudios de bachillerato y esto los hace menos propensos a reincidir. Los desmovilizados de la guerrilla responden mejor en su resocialización cuando tienen logros educativos. Una futura desmovilización colectiva de la guerrilla tiene grandes posibilidades de éxito si se centra en la educación, pues esta será garante de una menor reincidencia en actividades ilegales y será el motor de la transformación con el que se pasará la página de la violencia.
- En Antioquia el porcentaje (21 %) de mujeres exguerrilleras desmovilizadas está un poco por debajo al encontrado por Nussio (25 %); también lo está el

porcentaje de mujeres que pertenecieron a las AUC (5.5 % y no 9 %). Es decir, que la participación de las mujeres en hostilidades en el marco del conflicto armado en Antioquia está aproximadamente cuatro puntos por debajo de la media nacional. El porcentaje de mujeres internas en Antioquia (9 %), por el contrario, es mayor que el promedio nacional (7.5 %).

- El porcentaje de mujeres y hombres desmovilizados, capturados o sindicados/condenados en Antioquia es el mismo. La proporción es de aproximadamente un 9 % mujeres y un 91 % hombres, excepto por el caso de las mujeres en la guerrilla, en donde su participación es más alta.
- El 22.51 % de los desmovilizados residentes en Antioquia fueron reclutados siendo menores de 18 años. Con esta población hay que tener especial cuidado debido a que es más propensa a delinquir luego de la desmovilización, y suele haber durado más años en la organización, lo que también le incrementa su proclividad al crimen (4 % adicional por cada año en la organización).
- La población de desmovilizados residentes en Antioquia tiene pocas ataduras o generadores de control familiar, ya que la mayoría (65.2 %) no tiene hijos y solamente el 36.8 % tiene pareja estable. Sin embargo, como la mayoría (93.8 %) son actualmente adultos (26 a 60 años), su riesgo disminuye ostensiblemente.
- Los lugares en donde hubo reincidencia de los desmovilizados son los mismos en donde mayoritariamente residen y en donde, a su vez, hay una fuerte presencia de bandas criminales (Urabá y Bajo Cauca) y de grupos delincuenciales como en el caso de Medellín. En un eventual proceso de desmovilización de la guerrilla se deberá tener en cuenta esta variable, y por tanto, será importante propugnar regionalmente para que realicen su proceso de reinserción en municipios sin presencia de Bacrim.
- Los desmovilizados residentes en el Departamento provienen en su mayoría también de Antioquia. Otros lugares de origen son los departamentos de Córdoba (Tierra Alta, Montería y Valencia), Chocó (Riosucio, Unguía y Quibdó), Cundinamarca (Bogotá D.C), y Caldas (Samaná). Sus lugares de reclutamiento fueron similares.
- Teniendo en cuenta que los integrantes de las guerrillas estuvieron más motivados ideológicamente para su ingreso y participación en el grupo, en una eventual desmovilización colectiva existe un mayor riesgo de que vuelvan a delinquir si no les facilita su participación política en contiendas electorales.
- Solo el 17 % de los desmovilizados en Antioquia cuenta con un empleo formal. Teniendo en cuenta que el 84.3 % de ellos son desmovilizados de las AUC,

que según lo encontrado en la literatura tenían tres veces más oportunidades que un guerrillero de recibir un salario dentro de su organización, es decir, que eran principalmente incentivados económicamente, son desmovilizados que pueden sentirse más tentados a delinquir con el fin de poder suplir sus necesidades materiales ante la falta de ingresos legales. Sin embargo, la ayuda económica que reciben de la ACR disminuye el riesgo.

- Se puede prever que en una eventual desmovilización colectiva de las FARC y el ELN habrá menores índices de reincidencia asociados a la codicia, ya que se identificó que esta población proviene de lugares más pobres que los paramilitares, estuvieron menos incentivados económicamente, y por tanto, la falta de empleo no tendrá un impacto tan negativo en su reintegración. Sin embargo, la desmovilización de los bloques o frentes económicos de las FARC como por ejemplo el Frente 36 en Antioquia podrá compararse con la de los paramilitares.
- Según Alejandro Eder, el porcentaje de éxito del programa de reinserción en el ámbito nacional es del 80 %. En Antioquia, el 25 % de los integrantes activos del programa han reincidido, por lo que el porcentaje de éxito está por debajo de la media nacional (75 %).
- Es importante trabajar con las comunidades en donde hay un mayor número de desmovilizados residentes en Antioquia, especialmente en las subregiones Valle de Aburrá y Urabá en donde está domiciliado el 75 % de la población, para que el proceso de reincorporación con la comunidad sea exitoso y no se generen rechazos hacia los reinsertados, lo cual puede poner en peligro todo el proceso.

Anexo

La hipótesis clínica: el trastorno antisocial de la personalidad

Luis Gabriel Merino Cuartas¹⁹

La pregunta sobre la existencia de un determinado perfil psicológico en un grupo tan amplio como el de los victimarios, con su multiplicidad de causas, actores y geografías, debe incluir un complejo análisis que excede este estudio y que exige un estudio cuidadoso de sus historias clínicas, además de los factores biológicos, sociales y psicológicos que hayan podido contribuir con el desarrollo de dicho trastorno mental.

Sin embargo, con base en la amplia literatura sobre el tema, es posible identificar el trastorno antisocial de la personalidad como el trastorno mental que por la predominancia de ciertos rasgos psicopatológicos se puede encontrar en el grupo de victimarios. Este trastorno también ha sido llamado psicopatía, sociopatía o trastorno disociativo de la personalidad.

Según el DSM²⁰ un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alta dificultad clínica en la cognición, la regulación de las emociones y el comportamiento de un individuo, desencadenando una disfunción en los procesos normales psicológicos, biológicos y del desarrollo. Los trastornos mentales conllevan un alto nivel de incapacidad social, ocupacional y de desempeño en otras actividades importantes para el sujeto.

La presencia de conductas extremas entre los victimarios como los actos de sevicia reportados por las víctimas en diferentes publicaciones, relatos, denuncias y ejercicios de memoria, evidencian la posibilidad de existencia de cierto perfil psicopatológico entre los victimarios, que no puede ser explicado solamente desde las teorías motivacionales, económicas, políticas y sociales, y obligan entrar al terreno psicológico.

La anormalidad en las conductas es una compleja red de combinaciones entre predisposición, precipitación y perpetuación de diferentes factores, que pueden ser denominados psicopatológicos solamente cuando los síntomas ex-

¹⁹ Integrante del equipo de análisis territorial del SISC-D, psicólogo especialista en Estudios Políticos de la Universidad Eafit.

²⁰ El DSM al Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales, publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana (APA).

ceden los rangos normales y rompen el balance homeostático que mantiene el funcionamiento normal del individuo.

La condición esencial del trastorno antisocial de la personalidad hace referencia a un patrón mantenido y sistemático de irrespeto y violación por los derechos de otras personas y de negación de las normas sociales mínimas, patrón este que comienza en la niñez o adolescencia temprana y continúa hasta la adultez, pero con decrecimiento marcado a medida que el individuo envejece (a partir de la cuarta década).

Personas con este trastorno frecuentemente son manipuladoras con el fin de obtener ganancia personal, placer, dinero, sexo y poder; la predominancia del beneficio personal sobre otros es uno de los criterios fundamentales para diferenciarlo de otros trastornos de la personalidad.

Las personas que sufren de este trastorno repetidamente mienten, usan alias y se asocian con otros para realizar sus conductas. Las decisiones son tomadas en el calor del momento sin pensamiento a largo plazo y sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos en los otros. Existe una tendencia a ser irritable y agresivo, y a poner su seguridad y la de los otros en riesgo. Se involucran en actividades sexuales irresponsables, abusivas o violentas y por lo general son incapaces de mantener una relación afectiva monógama. También tienen actitudes irresponsables frente al trabajo que los llevan a tener largos períodos de desempleo, a pesar de que se les ofrezcan oportunidades laborales.

Estas personas demuestran poca compasión por las consecuencias de sus actos. Individuos con este trastorno culpan a sus víctimas de su conducta y racionalizan el daño con justificaciones del tipo “ellos se merecen este destino”, impidiendo compensar y reparar el daño causado. De igual forma, pueden tener una opinión personal inflada y arrogante, falta de empatía, incapacidad de ejercer paternidad o maternidad de forma efectiva e incapacidad para cuidar de otros y no soportan la cotidianidad. Es común que fallezcan prematuramente por vías violentas.

La prevalencia de este trastorno se observa principalmente en hombres, en personas con trastornos por uso de alcohol y abuso de sustancias, y en la población afectada por condiciones socioeconómicas adversas por niveles altos de pobreza.

En cuanto a la incidencia de los factores genéticos y fisiológicos, el trastorno es más común entre los parientes biológicos de primer grado, que en la población general. Estudios realizados en personas adoptadas confirman que la influencia de factores genéticos, pero también del medio ambiente, pueden desarrollar el trastorno.

La influencia del medio ambiente, especialmente una exposición temprana a situaciones de abuso infantil, negligencia en los cuidadores tempranos, paternidad errática e inestable, disciplina parental inconsistente y un estatus socioeconómico bajo pueden incrementar el desarrollo del trastorno, de igual forma que lo pueden hacer las predisposiciones genéticas.

Es importante concluir que no necesariamente todos los victimarios tienen que presentar este trastorno, como de igual forma no todos los que presenten este trastorno son victimarios, ni pertenecen a un grupo armado. Sin embargo, la combinación de predisposición genética, disposición psicológica y los factores medio ambientales ya descritos pueden acrecentar la presencia de este trastorno, con las consecuencias ya descritas para la salud mental.

Referencias bibliográficas

- Agnew, R., White, H. R., (1992). An Empirical Test of General Strain Theory. *Criminology* 30, 475-500.
- Akers, R. L., (2009). *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*. Transaction Publishers.
- Bayer, C. P., Klasen, F., Adam, H., (2007). Association of trauma and PTSD symptoms with openness to reconciliation and feelings of revenge among former Ugandan and Congolese child soldiers. *JAMA* 298, 555-559.
- Becker, G. S., (1968). *Crime and Punishment: An Economic Approach*. *Journal of Political Economy* 76.
- Berdal, M. R., (1996). *Disarmament and Demobilisation After Civil Wars: Arms, Soldiers and the Termination of Armed Conflicts*. Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies.
- Blattman, C., Annan, J., (2010). The Consequences of Child Soldiering. *The Review of Economics and Statistics* 92, 882-898.
- Blattman, C., Miguel, E., (2010). Civil War. *Journal of Economic Literature* 48, 3-57.
- Bøås, M., Hatløy, A., (2008). Child Labour in West Africa: Different Work – Different Vulnerabilities. *International Migration* 46, 3-25.
- Casas-Casas, A., Guzmán-Gómez, J., (2010). The Eternal Yesterday? The Colombian Reintegration Process as Social Dilemma. *Papel Político* 15, 47-85.
- CCDDR, (2009). *The Cartagena contribution to disarmament, demobilization, and reintegration*. CDDR, Cartagena.
- Collier, P., Hoeffler, A., (1998). On economic causes of civil war. *Oxford economic papers* 50, 563-573.
- Collier, P., Hoeffler, A., (2004). Greed and grievance in civil war. *Oxford economic papers* 56, 563-595.
- Davies, J. C., (1962). *Toward a Theory of Revolution*. *American Sociological Review* 27, 5.
- Duncan, G., (2006). *Los señores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*. Bogotá: Planeta.
- Duncan, G., (2010). *Recomendaciones taller de expertos seguridad en Medellín*. Presented at the Taller de expertos en Seguridad, Medellín, Colombia, pp. 1-8.
- Gates, S., (2002). Recruitment and Allegiance The Microfoundations of Rebellion. *Journal of Conflict Resolution* 46, 111-130.
- Grossman, H. I., (2002). "Make us a king": anarchy, predation, and the state. *European Journal of Political Economy* 18, 31-46.
- Gurr, T. R., (1970). *Why Men Rebel*. Princeton University Press.
- Hart, P., (1999). *The IRA and its enemies violence and community in Cork, 1916-1923*.

- Hill, R., Taylor, G., Temin, J., (2008). *Would You Fight Again?: Understanding Liberian Ex-combatant Reintegration*. United States Institute of Peace.
- Horton, L., (1998). *Peasants in arms war and peace in the mountains of Nicaragua, 1979-1994*. Ohio University Center for International Studies, Athens.
- Humphreys, M., Weinstein, J.M., (2008). Who Fights? The Determinants of Participation in Civil War. *American Journal of Political Science* 52, 436-455.
- J. M. Paige, (1975). *Agrarian revolution : social movements and export agriculture in the underdeveloped world*. Free P.
- Jennings, K. M., (2007). The Struggle to Satisfy: DDR Through the Eyes of Ex-combatants in Liberia. *International Peacekeeping* 14, 204-218.
- Colombia, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz (2011, diciembre), *Sentencia Fredy Rendón Herrera, radicación 110016000253200782701*, M. P. Jiménez López, U. T., Bogotá D.C.
- Kalyvas, S. N., (2006). *The logic of violence in civil war*, Cambridge studies in comparative politics. Cambridge University Press, Cambridge; New York.
- Kalyvas, S. N., Kocher, M.A., (2007). How "Free" is Free Riding in Civil Wars?: Violence, Insurgency, and the Collective Action Problem. *World Politics* 59, 177-216.
- Kaplan, O., Nussio, E., (2013). *Explaining Recidivism of Ex-Combatants in Colombia* (SSRN Scholarly Paper N.º ID 2350318). Social Science Research Network, Rochester, NY.
- Keen, D., (2000). *Incentives and Disincentives for violence*, in: *Greed & Grievance: Economic Agendas in Civil Wars*. Lynne Rienner Publishers, Boulder, Colo.
- Mashike, L., (2007). *Former combatants' involvement in crime and crime prevention: research report*. Centre for the Study of Violence and Reconciliation.
- Moloney, M., MacKenzie, K., Hunt, G., Joe-Laidler, K., (2009). The Path and Promise of Fatherhood for Gang Members. *Br J Criminol* 49, 305-325.
- Moser, C. O. N., McIlwaine, C., (2001). *Violence in a Post-conflict Context: Urban Poor Perceptions from Guatemala*. World Bank Publications.
- Nilsson, A., (2005). *Reintegrating ex-combatants in post-conflict societies*. Sida, [Stockholm, Sweden].
- Nilsson, R. A., (2008). *Dangerous Liaisons: Why Ex-Combatants Return to Violence. Cases from the Republic of Congo and Sierra Leone* (dissertation).
- Nussio, E., (2011). How ex-combatants talk about personal security. *Narratives of former paramilitaries in Colombia*. *Conflict, Security & Development* 11, 579-606.
- Nussio, E., (2012). *La vida después de la desmovilización: percepciones, emociones y estrategias de exparamilitares en Colombia*, Primera edición. ed, *Ciencia política*. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales-CESO, Departamento de Ciencia Política, Bogotá, D. C., Colombia.
- Nussio, E., Howe, K., (2012). What if the FARC Demobilizes? *Stability: International Journal of Security and Development* 1.
- Nussio, E., Ugarriza, J.E., (2013). *Are Insurgents Any Different from Counterinsurgents? A Systematic Integration and Validation of Motivational Studies from Colombia* (SSRN Scholarly Paper No. ID 2311442). Social Science Research Network, Rochester, NY.
- Olson, M., (1995). *The logic of collective action : public goods and the theory of groups*. Harvard University Press, Cambridge, Mass; London.
- Palacios, R., (2014). "La paz no caerá del cielo, ni firmando un papelito en la Habana" Alejandro Eder. *Colprensa*.
- Petersen, R. D., (2006). *Resistance and rebellion: lessons from Eastern Europe*. Cambridge University Press, Cambridge; New York.
- Ribetti, M., (2009). *Disengagement and beyond: A case study of demobilization in Colombia*. In

- T. Bjørge and J. Horgan (Eds.), *Leaving terrorism behind: Individual and collective disengagement* (pp. 152-169). New York: Routledge.
- Pizarro Leongómez, Eduardo (2004). *Una democracia asediada: Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia*. Editorial Norma, Bogotá.
- Rigby, A., (2001). *Justice and Reconciliation: After the Violence*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Roldán, M., (2002). *Blood and fire: la violencia in Antioquia, Colombia, 1946-1953*. Duke University Press, Durham.
- Scott, J. C., (1976). *The moral economy of the peasant : rebellion and subsistence in Southeast Asia*. Yale University, USA.
- Sherman, L.W., Gartin, P.R., Buerger, M. E., (1989). *Hot Spots of Predatory Crime: Routine Activities and the Criminology of Place**. *Criminology* 27, 27-56.
- Taylor, M., 1988. *Rationality and revolution*. CUP.
- Tezcur, G. M., (2009). *When Democratization Radicalizes? The Kurdish Nationalist Movement in Turkey* (SSRN Scholarly Paper N.º ID 1451562). Social Science Research Network, Rochester, NY.
- Theidon, K., (2007). *Transitional Subjects: The Disarmament, Demobilization and Reintegration of Former Combatants in Colombia*. *IJTT* 1, 66-90.
- Themnér, A., (2011). *Violence in post-conflict societies remarginalization, remobilizers, and relationships*. Routledge, Nueva York (Estados Unidos).
- Thoumi, F., 2010. *Medellín: Comunas sin comunidad*. Presented at the Taller de Expertos en Seguridad, Medellín, Colombia, pp. 1-13.
- Villegas de Posada, C., (2009). *Motives for the enlistment and demobilization of illegal armed combatants in Colombia*. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology* 15, 263-280.
- Weisburd, D., Groff, E., Yang, Sue-Ming, (2012). *The criminology of place: street segments and our understanding of the crime problem*. Oxford University Press, Oxford; New York.
- Wickham-Crowley, T. P., (1992). *Guerrillas and Revolution in Latin America: A Comparative Study of Insurgents and Regimes Since 1956*. Princeton University Press.
- Wood, E. J., (2003). *Insurgent Collective Action and Civil War in El Salvador*. Cambridge University Press.

